

Bolivia

siglo **XXI**

De la República
al Estado plurinacional

Bolivia

siglo **XXI**

De la República
al Estado plurinacional

Una publicación bajo la dirección de
EDUARDO QUINTANILLA BALLIVIÁN



HARVARD CLUB DE BOLIVIA

9 VIVIR EN CIUDADES

CARLOS HUGO MOLINA

Simultáneamente al desconocimiento de los procesos migratorios, irrumpe la Bolivia urbana, las ciudades intermedias y las regiones metropolitanas, realidades que fueron obviadas por un Estado que se definió “originario indígena campesino” y cuyas consecuencias hoy debemos enfrentar. Quizá este aspecto se sienta más fuertemente en la ciudad de Santa Cruz por el crecimiento exorbitante de su población, y que el presente ensayo prospectivo toma como base del estudio nacional. Aquí ya está Bolivia a pesar que muchos en el occidente no lo aceptan. Y Bolivia seguirá viniendo, a pesar de quienes en el oriente quisieran resistirse. Considerando la ciudad como un territorio de referencia, las respuestas que se obtengan pueden ser de utilidad para los demás centros urbanos.¹

Poniendo los datos en proporciones comprensibles, si los 11 millones de bolivianos viviéramos hoy en el departamento de Santa Cruz y no quedara nadie en los otros ocho departamentos, seríamos solo 30 habitantes por km². Haití tiene 395. Japón, 337. El Salvador, 316. Cuba, 103. Costa Rica, 98. México, 63...

Estudiando los Censos de Población y Vivienda de los años 1992, 2001 y 2012, y analizando situaciones y eventos cotidianos presentes en los medios de comunicación, se estudian variables, se realizan proyecciones y se plantean escenarios futuros para sensibilizarnos colectivamente y aproximarnos a una realidad urbana que nos está tomado desprovistos de instrumentos para enfrentarla, cuando ya vivimos en ella.

1 La ciudad de Tarija, en este momento, posee más o menos la población que tenía la ciudad de Santa Cruz en el Censo de 1976.

El presente ensayo, de manera disruptiva, desde una visión ciudadana y académica crítica, y utilizando fuentes primarias e investigaciones en curso, plantea las preguntas necesarias.

La agenda urbana y la construcción de ciudades

Un equívoco político en la construcción del Estado boliviano está generando una confrontación de resultados negativamente innecesarios, que se plantea con la ruptura de la relación entre lo urbano y lo rural. La opción ideológica por lo “originario indígena campesino” nos ha llevado a una suerte de negación de lo urbano, como si vivir en ciudades no existiese o fuese negativo.

Resultaba complicado políticamente, es cierto, modificar un discurso que generó respuesta electoral y simpatías, adentro y fuera del país; sin embargo, existía la constatación de que, respondiendo a una pulsión mundial, la gente prefiere vivir en conglomerados humanos provistos de oportunidades (aunque no sean todas ciertas) a hacerlo en territorios abandonados, sin servicios públicos básicos y lejanos de cualquier lugar.

No se trata de la ruptura que generó el capitalismo y la Revolución Industrial que demandaba mano de obra en las fábricas; la multiplicación del sindicalismo y la fuerza del proletariado establecieron, lucha social de por medio, un equilibrio que se ganó con acción política, pero que fue más lejos de la simple reivindicación de clase. Sería un acto de torpeza ideológica decir ahora, como se escuchaba a inicios del siglo XX, que las ciudades buscaban aniquilar al campo y su capacidad organizativa. Estamos frente a una demanda de economía de escala y de cobertura de condiciones de vida digna, esto es lo que está en juego. Se viva en el campo o en la ciudad.

La denominada Nueva Ruralidad plantea retos profundos a las necesidades de seguridad y soberanía alimentaria expresadas en el objetivo 2, Hambre Cero, que se ha impuesto la humanidad. ¿Quién producirá y dónde el alimento que necesitan quienes viven en las ciudades? Recordemos que la población en América Latina ya vive en un 80% en ciudades, y Bolivia, en el año 2032, lo hará en un 90%.

Se trata, entonces, de un acto de inteligencia el encontrar una respuesta ajustada a nuestra realidad. Un país que fuera gobernado por alguien que se asumía campesino no reconoció que su gente, y los originarios e indígenas, se vaciaron hacia las ciudades. Aquí no hay un acto de perversidad ideológica ni de consignas políticas, se trata de una constante desde los albores de la historia de la humanidad que se expresa en vivir en

comunidad y migrar a los lugares donde existen mejores tierras, hoy, con mayores oportunidades.

Las ciudades ya llegaron a Bolivia. Estamos viviendo en ellas sin cumplir la agenda urbana básica que nos señala la realidad. Cuando comprobamos qué nivel de necesidades estamos resolviendo, nos damos cuenta de las asignaturas pendientes que debemos enfrentar: problemas de transporte, distribución de alimentos, seguridad, oportunidades de trabajo, ocio productivo...

Lo único que no podemos hacer es negar esa evidencia. Y por el volumen de respuestas que estamos encontrando, tampoco tenemos que angustiarnos si todavía no tenemos las respuestas adecuadas; resulta que el mundo ya se ha dotado de soluciones para cada una de las necesidades, y si bien no debemos imitar y copiar, el uso de la inteligencia para adecuar e innovar señalan el camino por el que debemos transitar.

“Los indígenas estarán en el poder toda la vida”, dijo el expresidente Morales al inaugurar el IX Jach’a T’antachawi (Gran Encuentro) del CO-NAMAQ, afín al MAS, que se desarrolló en la ciudad de Llallagua, Potosí (*Página Siete*, 2018).

La construcción simbólica del Estado Plurinacional enfrenta su prueba de consistencia al enfrentarse con la realidad. Las transformaciones materiales van primero y después vienen las instituciones. Por eso, pretender hacer descansar en las estructuras administrativas y plantear los imaginarios como objetivos para administrar el poder, aunque puede ser efectista electoralmente, tiene sus complicaciones en materia de sostenibilidad, pues pueden terminar en confrontación racistas y nacionalistas y no en doctrinas rebatibles y debatibles.

Es el fetiche boliviano del “papel sellado” que escuché explicar a Guillermo Bedregal en 1979; sostenía que la herencia colonial de la Audiencia de Charcas impactó en la médula de los colonizadores y colonizados que demandaban que todo se expresara en una ley para “garantizar” su cumplimiento. Esa fue la razón, además de las políticas, por la cual los títulos de Reforma Agraria debían ser firmados y entregados por el presidente de la República, porque si no, no habría garantía de cumplimiento en favor de los beneficiados. Aplicamos la misma lógica en el reconocimiento de las personerías jurídicas de las organizaciones territoriales de base (OTB), lógica que ha sido multiplicada hasta el infinito por el MAS como un nítido instrumento de la revolución nacional.

En el caso de que en el futuro mediato los indígenas y campesinos no ocuparan lugares de preeminencia política no dependerá de marginalidad ni de exclusión, sino de razones democráticas explicadas por evidencia empírica. La migración campo-ciudad, con la que no debemos alegrarnos,

es una constante mundial generada por economía de escala, cambio climático, ausencia de satisfactores básicos en el territorio y los precios internacionales competitivos, entre otras razones. Basta decir que el Primer Mundo, en el que todos los servicios básicos están en el territorio y existen subsidios para la producción del campo, sufre el despoblamiento rural más descarnado. Y como esas condiciones no responden al mandato de un decreto supremo, se agravan en un país como el nuestro, de gran extensión y poca población. Chuquisaca, Oruro y Potosí tienen los índices más severos. La sostenibilidad política frente a un proceso de esa naturaleza deberá pasar de lo racial a lo ideológico para ser democrático.

Como recuerda Roberto Laserna, de manera evidente la población viviendo en ciudades produce economías de escala que reducen los costos de inversión y provisión de servicios públicos y mejoran los flujos de información, potenciando la ciudadanía. Todo eso, lo repite Miguel Urioste, completado con la parte de nueva ruralidad, territorialidad y seguridad alimentaria que ahora el mundo debate como Hambre Cero, objetivo 2 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mientras se nos vacían las TCO y el altiplano.

La pregunta que necesita respuesta sigue siendo: ¿cómo administraremos un país, el año 2032, con 1 millón de km² sin masa crítica poblacional y prácticamente vacío?

La comunidad académica fue sorprendida por una afirmación del exvicepresidente García Linera: “Mientras que en el resto de los países la población rural disminuye, en Bolivia comenzó a suceder un proceso diferente: la población rural se ha incrementado”.²

Las palabras de las autoridades causan Estado en función de su investidura. La afirmación de Linera contradice la tendencia migratoria campo-ciudad que se está produciendo en Bolivia y resulta preocupante si sobre la base de esas afirmaciones se aprueban políticas públicas. En este momento, un 75% de la población boliviana vive en el área urbana y 25% en el área rural, y repito, la proyección señala que en el año 2032, en dos censos más, la población urbana será del 90%.

A esta altura del conocimiento y la experiencia acumulada en América Latina ya sabemos que, para que no se acelere la migración, se necesita solución a dos situaciones:

- 1) concentración de servicios públicos de calidad en ciudades intermedias, y

2 *La Razón Digital*, 19 de mayo de 2018. Web. https://twitter.com/LaRazon_Bolivia/status/997878220493082624

- 2) opciones de desarrollo económico y simbólico que fijen a la gente en el territorio.

La experiencia demuestra que los gobiernos centrales no están en condiciones de ofrecer solos respuestas a estas cuestiones y deben facilitar y alentar que la iniciativa y creatividad de la gente que vive en los territorios, con sus autoridades locales, lo haga.

Para enfrentar esos retos necesitamos respondernos preguntas puntuales. ¿Tienen los departamentos las condiciones objetivas (competencias, recursos, institucionalidad...) para enfrentar su desarrollo de manera integral, liberando sus capacidades y dando respuestas efectivas a sus necesidades? ¿Cree el gobierno central, en su infinita inocencia, que puede resolver los problemas y necesidades de la gente que vive en los territorios, construyendo obras dispersas definidas desde el centralismo? ¿Cree que puede liberar la creatividad, la producción y generar excedente económico y simbólico limitando a los departamentos en la toma de sus decisiones?

En su momento, la Unión Europea creó una serie de indicadores de desarrollo y cohesión social que le permitió identificar las regiones, dentro de los países, que se encontraban por debajo de la denominada “media europea”. Para ellos se crearon programas de apoyo que les permitieran mejorar en sus indicadores, y habrá que señalar que tampoco resolvieron el problema del despoblamiento rural.

Aunque no existe unanimidad en los países en la definición de ‘ciudades intermedias’ y la categoría está relacionada con variables mayores que el número de habitantes, los procesos migratorios en América Latina son inexorables y por ello sorprenden sus consecuencias; las ciudades seguirán siendo receptoras de población que responde a un itinerario campo-ciudad y ciudad-ciudad por esta imposibilidad material que tienen los Estados de ofrecer todos los servicios básicos a la población en los territorios en los que viven. Escuchamos repetir con diferente énfasis y con los diversos tonos de voz que pueblan nuestro continente comprender condiciones como extensión territorial, economía de escala, expectativas legítimas de las personas, ausencia de planificación, carencia de sostenibilidad fiscal financiera, cambio climático, falta de oportunidades económicas para el desarrollo.

El fenómeno debe ser enfrentado desde una perspectiva multidimensional y multisectorial, y con niveles de coordinación mayores a los que existen actualmente para resolver una exigencia que llegó para quedarse y que ya impone sus dinámicas. Lo urbano, ausente en el debate de las políticas públicas, empieza a reconocerse como una problemática amplia y compleja que necesita respuestas de las mismas dimensiones.

Hay experiencias y respuestas para todos los retos, estamos a tiempo, pero debemos asumir una dinámica que todavía no adquiere la rapidez que el momento demanda por esta realidad poblacional que nos lleva a vivir en ciudades. Esta afirmación tan simple adquiere características de preocupación por la ausencia de consciencia urbana que padecemos. La medida de esta categoría se da en conductas que pasan por comportamientos cotidianos (separación de la basura en casa, respeto a las paradas de buses, protección del peatón, existencia de espacios de uso público que alienten la vida sana y el desarrollo de capacidades culturales y humanas, ciclovías, oferta cultural orgánica...).

Posiblemente la categoría que resume este conjunto de relaciones de la persona con la ciudad sea el ocio productivo. Este término expresa el modo en que se utiliza el tiempo que tendría que ser de uso personal, luego de descansar y trabajar en la cotidianidad, el sábado, domingo, los feriados y las vacaciones.

¿Qué oportunidades me ofrece la ciudad para desarrollar mis capacidades, individuales y colectivas, en el marco de mi comunidad? Deporte, cultura, recreación, museos, bibliotecas, existencia de canchas deportivas de acceso público, prácticas organizadas de actividades físicas dan la fisonomía de un espacio en el que la persona es el centro de atención.

Si todo esto es lo positivo, lo que tenga que ver con lo contrario atenta contra este nuevo derecho humano. Dos son los síntomas directos que tienen que ver con el respeto de quienes vivimos en ciudades: el transporte público y los trámites administrativos.

Un sistema de transporte deficiente, desarticulado, carente de calidad, de calor humano, de condiciones técnicas, disminuye el tiempo para el ocio productivo. Consideremos que el tiempo que pasa una persona trasladándose es un tiempo improductivo que, sumado a las horas de todos los viajeros urbanos, ya se está midiendo en términos económicos.

El otro síntoma es más cruel desde todo punto de vista. Las filas a las que nos acostumbramos como si fueran normales para hacer cualquier tipo de trámites, con el riesgo de que falten requisitos o tengamos que escuchar vuélvase mañana o la autoridad está de viaje y por ello no despacha, se convierte en una ofensa a la racionalidad humana y un abuso por parte de las administraciones.

Una fila para ingresar al estadio o a un espectáculo público de carácter privado no es similar a la que se realiza para alcanzar un cupo de salud que obliga a los pacientes a estar desde la madrugada, o para la obtención de un certificado, de una autorización, de un documento, etc. Ese tipo de filas son un real atentado contra los administrados, y el tiempo que le están robando al desarrollo de su creatividad, de su ocio productivo. El ocio

productivo es un derecho que debemos incorporar a nuestra vida cotidiana. De manera plena y con consciencia ciudadana.

Simultáneamente, la necesidad de comprender el fenómeno migratorio hacia las grandes ciudades y el abandono del área rural productiva por su población originaria nos llevó a investigar una categoría urbana que pasaba desapercibida por la ausencia de políticas públicas sobre ella, las ciudades intermedias.

Junto con el equipo del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), desde el año 2012, estudiamos esta categoría en sus manifestaciones cualitativas y cuantitativas para ajustar las experiencias existentes; la tendencia migratoria ha llevado a que América Latina sea el continente con mayor población urbana del mundo, con el 80% de sus habitantes.

Unida a la investigación nacional, propusimos a un conjunto de organismos académicos, de desarrollo y políticos de América Latina un relevamiento del tema para conocer el estado del arte sobre las ciudades. Producto de la rigurosidad metodológica y los resultados logrados a través de 10 encuentros internacionales, hemos abierto un debate que nos muestra sus potencialidades operativas y prácticas. Bajo la coordinación del CEPAD,³ los encuentros se han desarrollado en diferentes ciudades para considerar temáticas sobre la misma materia:

1. Asunción del Paraguay, 12 de diciembre de 2016. El reto de las ciudades intermedias, inteligentes y productivas.
2. San José de Costa Rica, 23 y 24 de febrero de 2017. El reto de las ciudades intermedias en el ámbito rural.
3. Miami, 12 al 15 de junio de 2017. Las ciudades intermedias y los gobiernos locales.
4. Badajoz, 21 y 22 de septiembre de 2017. Ciudades intermedias y mundo rural frente al proceso de urbanización.
5. Santa Cruz de la Sierra, 5 y 6 de abril de 2018. Ciudades intermedias, una respuesta a los procesos migratorios.
6. Santa Cruz de la Sierra, 29 de octubre de 2018. La gestión del territorio, el despoblamiento rural y las ciudades intermedias a través de experiencias sostenibles.
7. Cáceres, 25 de febrero de 2019. Dimensión internacional del despoblamiento rural y el rol de las ciudades intermedias.
8. Santa Cruz de la Sierra, 15 y 16 de julio de 2019. Respuestas al despoblamiento de las áreas rurales y el nuevo rol de las ciudades intermedias.

3 Ver www.ciudadesintermedias.org.bo.

9. Palencia, 10 y 11 de octubre de 2019. Ciudades intermedias y el patrimonio cultural como oportunidad para el desarrollo humano sostenible.
10. Ciudad de México, 27 y 28 de abril de 2020. Ciudades intermedias en su rol como nodos de desarrollo desde el enfoque territorial.

En dichos encuentros exploramos respuestas concretas a necesidades reales. La Universidad Internacional de la Florida, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), el Consejo de Gobernadores del Paraguay, el BID, la CAF, ONU-Hábitat, AECID y los hermanos extremeños a través del Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE) hemos consolidado una alianza que nos enriquece y ofrece alternativas prácticas.

En esas oportunidades, un total de 120 académicos, investigadores y políticos de 18 países de América Latina, España, Estados Unidos, Italia y Portugal debatimos experiencias sobre este instrumento de desarrollo territorial que ofrece una respuesta a la migración campo-ciudad. Junto al conocimiento que adquirimos en el intercambio internacional y el estudio que ejecutamos en Bolivia, somos conscientes de que este instrumento deberá convertirse en algún momento en un Proyecto País en favor de la gente, imprescindible para formar nodos de servicios públicos, fortalecidos con el turismo sustentable y con seguridad alimentaria.

Las condiciones existentes para vivir en ciudades

El proceso migratorio hacia las ciudades obliga a considerar algunas variables de imposible desconocimiento a partir de una pregunta básica: ¿es irreversible que la gente termine viviendo en áreas urbanas, abandonando el campo?

Existen algunos hallazgos que ofrecen luces al cruzar experiencias de América Latina y España. El primero tiene que ver con la necesidad de desarrollar capacidades en las instituciones y en los ciudadanos. Se complejiza cada vez más la vida en comunidades y ello obliga a manejar un instrumental de gestión desde lo público, y de conocimiento desde la sociedad, que superen la improvisación que tanto daño hace a los procesos.

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, anteriormente, y hoy los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son un reto para lograr equilibrios en la inversión pública y privada y en la ocupación del territorio.

La sostenibilidad obliga a considerar acciones de mitigación frente a los cambios y los desastres, y de adaptación frente a procesos planificados y concertados. La llamada de atención de huracanes, terremotos, sequías y erupciones volcánicas son de imposible desconocimiento, y aunque existen territorios como el boliviano que no tiene la presión inminente de esos eventos, el impacto global del cambio climático y sus consecuencias nos envuelve igualmente con sus manifestaciones de sequía/incendio y lluvia/inundación.

Otro hallazgo está en relación a los instrumentos con los que cuentan las autonomías territoriales para reaccionar frente a situaciones concretas. La existencia de atribuciones, capacidades y recursos para aprobar o ejecutar políticas públicas efectivas a la hora de llevar a cabo acciones de desarrollo, producción o reacción frente a un desastre interpela a los gobiernos en los procesos de gobernabilidad y descentralización efectivas. El ejercicio de la autonomía en estos casos debe pasar de un elemento discursivo a otro altamente práctico que ofrezca condiciones de oportunidad.

Estas condiciones concluyen con la necesidad de un modelo de desarrollo territorial que considere las potencialidades y capacidades productivas, las necesidades concretas de la población y la sostenibilidad de las acciones, con una respuesta integral.

La falta de integralidad en la oferta de condiciones locales genera lo que llamamos “presión migratoria” y provoca las consecuencias que estamos advirtiendo: el abandono del campo, la disminución de la seguridad alimentaria y la presión sobre los servicios públicos en las ciudades.

Lo que debemos tener claro es que no existe la posibilidad de una vida plena en las ciudades sin una relación equilibrada con el área rural, en todas sus manifestaciones. Y viceversa. De ahí la necesidad de desarrollar conciencia urbana junto con el énfasis que el Estado boliviano viene haciendo en lo originario indígena campesino, que no condice con la realidad urbana de Bolivia ni de América Latina.

Las ciudades intermedias en la revolución urbana de Bolivia

Para preparar el espíritu y adecuar nuestras acciones, reitero que la proyección matemática con ajustes señala que en el año 2032, de los 15 millones de bolivianos que seremos, el 90% vivirá en ciudades, con el 85% viviendo en los departamentos del eje central y 1 millón de kilómetros cuadrados sin masa crítica poblacional. Otro dato firme para el análisis es que en el año 2032 el peso poblacional que tendrá Santa Cruz en lo

departamental será de 7.500.000 habitantes, y en la ciudad de Santa Cruz bordeando los 5.500.000 en la mancha conurbana.⁴

Otra información relevante evidencia que en Bolivia, sobre 340 gobiernos locales, existen 74 municipios en el rango de 20.000 a 100.000 habitantes, territorios que cabrían en la clasificación de aportar como ciudades intermedias. Restando los municipios que se encuentran en regiones metropolitanas, quedarían 51 para estudiar y proponer una red con calidad de nodos, que permitiría cubrir el territorio nacional con servicios básicos y así lograr que la población no tenga que irse más lejos de donde vive por falta de Estado. Solo como referencia, 256 gobiernos locales tienen población menor a 20.000 habitantes, y en ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel.

Los ajustes a los que se hace referencia están dados por la “presión migratoria”, que corresponde a las condiciones materiales que la población necesita para vivir en un territorio. Si a la población de esos municipios le sumamos carencia de educación superior, falta de servicios y oficinas públicas para realizar trámites, bancos, calidad de vida, mercados, la presión migratoria aumentará.

La visión del gobierno boliviano hasta octubre del año 2019⁵ hacía referencia a las ciudades intermedias como ámbito de inversión pública de servicios dispersos que no hacen masa crítica en volumen y calidad, con carencia de integralidad y de condiciones materiales y oportunidades económicas. La ausencia de esas condiciones provoca la inexorable tendencia migratoria que sigue la población actualmente. Si en un territorio no existe una oferta integral de servicios, inexorablemente el desborde poblacional se planteará por la carencia, aunque tenga algún servicio con excelencia.

Para que disminuya la presión, se requiere variables de mayor complejidad que la danza de recursos ejecutados y proyectados hasta 2025, además de corresponder a una conducta en América Latina que ya cuenta con el 80% de la población viviendo en ciudades y que en el caso boliviano se agrava por la extensión y topografía de nuestro territorio.

La línea de investigación que desarrollamos propone la identificación de ciudades intermedias que cumplan la condición de nodos territoriales de servicios públicos, fortaleciendo su calidad de centros de

4 Los datos que compartimos corresponden a la tendencia de crecimiento y abandono de territorios contrastados sobre la base de los Censos referidos, y aplicando los ajustes que toman en cuenta el crecimiento nacional, el crecimiento departamental en comparación con el nacional y el que tienen los municipios en relación a los dos anteriores.

5 Ver los comentarios de Hugo Siles, ex viceministro de Autonomías, en el suplemento *Séptimo Día, El Deber*, 15 de octubre de 2018.

seguridad alimentaria y potenciando el turismo sostenible como cohesión social y generación de desarrollo económico local.

La identificación de la red de ciudades intermedias requiere una decisión de política pública, pues deben poseer la mayor cantidad de instituciones, instancias y servicios públicos para evitar que los habitantes se trasladen a lugares más lejanos a buscarlos. Esta condición solo puede cumplirla el Estado. La ignorancia de esta realidad se distrajo con la construcción de canchas deportivas, problemas en el Fondo Indígena o creyendo que solamente la infraestructura básica inorgánica era la que fijaría a la gente en el lugar en el que vive.

El gobierno del MAS se entrampó en su legítima propuesta política de ruralidad y arrastró al Estado a un error conceptual. Quien deja el campo, deja de ser campesino. Y el originario indígena, al trasladarse solo con su fuerza de trabajo, compite en desventaja en las áreas urbanas. Se ha abierto un debate sobre las condiciones culturales y sociológicas de los grupos que se trasladan a ciudades y que se califican como “indígenas urbanos”. La evidencia está demostrando que resulta extremadamente complejo el traslado de usos y costumbres, modos de organización y de producción de lo rural a lo urbano, y lo que queda objetivamente son personas con dificultades prácticas para insertarse en un medio que la mayoría de las veces resulta hostil, más allá de la voluntad de las personas y los hábitos e instrumentos que se necesitan para sobrevivir en una ciudad.

Bolivia, como Estado, tiene una deuda de servicios básicos con su población, y los datos debieran posesionar a la presión migratoria como una invitada forzosa y obligatoria de nuestro debate cotidiano.

Las ciudades intermedias para superar la trancadera física y mental

La situación del tráfico en nuestras ciudades se está tornando sencillamente inhumana. Es una prueba cotidiana a la cordura, el equilibrio y el buen genio.

La preocupación sobre el tema del transporte es similar a la que existe en las ciudades del continente. La preocupación se demuestra en el volumen de estudios, investigaciones, propuestas y soluciones que se están planteando. La CAF ha creado un Observatorio de Movilidad Urbana (OMU)⁶ para apoyar la reivindicación humana de quienes sufren rutas

6 Ver https://www.caf.com/app_omu/#graphic?i0=superf_area_metropol_km2_urba&i5=num_vehic_micro_bus&i2=viajes_hab_dia_colectivo&i3=tiempo_hs_hab_dia

inmisericordes, servicios pésimos y costos desproporcionados. “Los hogares bolivianos dedican –en promedio– 20% de su gasto en transporte”. El OMU estudia las variables socioeconómicas, costos y tarifas, transporte individual, transporte colectivo, infraestructura, movilidad, gestión de tránsito, tiempos y distancias, patrimonio, seguridad vial, medio ambiente, energía.

En el estudio que estamos desarrollando, descubrimos ciudades que han encontrado respuesta a sus problemas de manera concertada, civilizada y sonriente. Parece que no necesitamos inventar el hilo negro, pues bastaría con adecuar de manera inteligente las soluciones de nuestros vecinos. En todos los casos se escucha la frase “Plan Maestro de Transporte”, primera condición para proponer medidas ajustadas a la realidad.

Por ejemplo, el transporte de pasajeros en la ciudad de Córdoba, Argentina, se realiza con colectivos, remises, taxis y trolebuses. En 2015 había, en promedio, una flota de unos 830 colectivos y 45 trolebuses que transportaron un total de 184.165.537 pasajeros entre enero y noviembre de 2016. En cuanto a la flota de taxis y remises, en 2015 prestaban el servicio un total de 7.237 unidades. Para administrarlo, el municipio cuenta, desde 1995, con el Centro de Control de Tránsito, que tiene la tarea de operar los semáforos de la ciudad que incluye aproximadamente 310 intersecciones. Posee un sistema de circuito cerrado de televisión que permite monitorear las condiciones de operación de los cruces más conflictivos, además, detecta oportunamente incidentes o situaciones de congestión (*La Voz*, 2018).⁷

Otra solución viene con el “pago con tarjeta sin contacto”, método electrónico que sirve para unificar el servicio a través del Gobierno Municipal y que homologa el pago en calidad, distancia y tiempo.

Mientras tanto, en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, nos estamos ahogando con 365 paradas de taxis, radiotaxis, minibuses de transporte interprovincial e intermunicipal que ocupan avenidas y anillos, ocasionando un caos que se suma al aumento entusiasta de 2.800 autos mensuales al parque automotor, y que se agregan a los 458.000 motorizados existentes. En el primer semestre de 2017 la cifra aumentó en 16.800 vehículos, haciendo un total de 474.800, los cuales, hasta finalizar la gestión, se estima que fueron 491.600 autos.

No es distinta la situación en las capitales del eje central, y aun ciudades intermedias como Tarija sufren el embate de los sistemas sindical-corporativos que controlan las rutas, contra el interés de la población.

7 Similar solución han adoptado en Córdoba, Andalucía, ver Irina Marzo, “29 cámaras de la Policía Local grabarán el tráfico en Córdoba”, *Córdoba*, 22 de julio de 2007.

El ocio productivo

Aprender a vivir con la realidad tiene sus retos. En Bolivia nos está costando aceptar una matriz urbana que ya define nuestra vida cotidiana. Vivir en la ciudad implica una demanda de servicios de manera articulada. La población exige, cada vez más, respuestas orgánicas en materia de transporte, provisión de salud, educación, cultura, espacios públicos, seguridad ciudadana. Así, se les complica cada vez más a las autoridades municipales cumplir con sus responsabilidades porque ya no hay espacio para la improvisación.

Los colectivos sociales ligados en gran medida a grupos *millennials* hacen suyas, a través de organizaciones temáticas, la defensa de la vida, del ambiente, de los animales, la lucha contra la violencia, el uso de la bicicleta y las prácticas deportivas, la participación ciudadana. Cada una de estas tareas va más allá de las actividades obligatorias de la población y despiertan grandes compromisos y movilización colectiva.

Cada una de estas actividades libres y voluntarias son la expresión de un deseo que los habitantes de la ciudad están descubriendo como parte de su propio desarrollo. Gana la solidaridad y la calidad de vida.

Simultáneamente a estas acciones se está desarrollando una categoría ligada directamente a la vida en la ciudad, el ocio productivo. ¿Cómo utilizo mi tiempo libre, qué oportunidades me da mi ciudad para ocuparlo, cómo se articulan para facilitar accesos, etc.?

La oferta pública que exista en esta materia demostrará el nivel de desarrollo urbano y la calidad de vida. Festivales, concursos, clases abiertas, jornadas recreativas que se ofrezcan como derecho y opción libre ayudarán a complementar la existencia de los otros servicios públicos.

El ocio productivo está dejando de ser una gentileza de las autoridades o una posibilidad construida desde la sociedad civil. Debe ser una posibilidad y un derecho que la gente tenga en su favor. Las ciudades aportan su población para que el territorio se convierta en un espacio de creación y construcción espiritual y cultural.

La existencia de una agenda permanente, articulada y continua demostrará que el compromiso es asumido como parte de la vida cotidiana y adquirirá la calidad de práctica habitual, necesaria, hasta llegar a constituirse en oferta obligatoria.

El día que tengamos una lista de Juegos Florales en todo el país, carreras pedestres orgánicas en sus diferentes niveles de resistencia, conciertos de música en plazas públicas, apropiación de espacios urbanos para las artes plásticas, concursos de oratoria e innovación, circuitos de bibliotecas y museos..., ese día estaremos reconociendo la importancia de la gente.

Por ser un derecho, no estamos obligados a ejecutar una actividad, sin embargo, el modo de utilizar ese tiempo y espacio demostrará indiscutiblemente un grado de conciencia urbana.

La primera constatación que realizamos sobre el ocio productivo es su desconocimiento. Cuando preguntamos sobre él, la respuesta se expresa en la ignorancia que existe sobre sus posibilidades y alcances. Luego de explicarlo y señalar alguna de sus manifestaciones, queda en evidencia que si bien realizamos algunas actividades, estas no responden a una opción pública organizada y en la mayoría de los casos dependen únicamente de condiciones económicas privadas.

Otra constatación es la que se refiere al uso de un tiempo considerado improductivo, ocupado en el traslado entre el domicilio y el lugar de trabajo por quienes deben utilizar transporte público; rutas poco prácticas, en unidades sin las condiciones de comodidad la mayoría de las veces, han sido estudiadas en América Latina como uno de los periodos que generan frustración y agobio. Otra es la realización de trámites burocráticos acompañados de filas inmisericordes y con trato displicente al que se suma el “vuélvase mañana”, “le falta un documento”, “hoy no se atiende”, cuando no están matizados con nuestro deporte nacional de bloqueos y movilizaciones.

El administrado, el usuario, el cliente, el ciudadano, aunque es el sujeto a quien va dirigida la oferta y los discursos, es castigado por la ausencia de consideraciones elementales.

Mucho ha recorrido la ciencia administrativa para superar estas situaciones desde el campo del sector público, ámbito que motiva esta reflexión. Categorías como ciudades inteligentes, *e-government*, gobierno en línea, trámites en red, aplicaciones amigables en los celulares se ofrecen ya no como una novedad y una gentileza, sino como una necesidad. Estas posibilidades van acompañadas de los denominados Actos Reglados, es decir, de aquellas acciones en las que se le reduce a la administración la discrecionalidad para decidir, pues cumpliéndose las condiciones debe lograrse una respuesta en la que no hay espacio a la arbitrariedad o el favoritismo, reduciéndose la lenidad y la corrupción.

¿Cómo lograr el respeto por parte de actores públicos y privados con quienes vemos disminuir el tiempo de goce, formación, recreación o descanso creativo por ausencia de una responsabilidad y una sensibilidad elemental de quien brinda un servicio?

Convengamos en que no nos estamos refiriendo a la asistencia al estadio, a un concierto privado, un evento específico de interés individual o colectivo, y que hace 2.000 años, los 60.000 espectadores del Coliseo Romano lo desalojaban en media hora; estamos hablando de las filas desde la madrugada para una atención de salud, un cupo para que los niños asistan

a una escuela, la recepción de los beneficios de un bono, la tramitación de un documento personal, la autorización de obra, construcción...

El conocimiento de un derecho genera el ejercicio de la ciudadanía, obliga la existencia de procedimientos y establece plazos y condiciones por parte de la administración. Si a ello le sumamos el respeto del tiempo y del derecho humano al ocio productivo, estaremos defendiendo un espacio de nuestra existencia cuyo destino es nuestra calidad de vida, nuestra superación individual y colectiva y el valor de nuestras relaciones familiares e interpersonales.

¿De dónde provendrán los recursos?

En el año 2018 se resolvieron dos componentes que definieron la vida social y política boliviana. Ambos, en márgenes esperados.

Nadie suponía, y no creo exagerar, que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reelección indefinida del expresidente Morales se produciría antes de las elecciones para conformar las instancias del Órgano Judicial. El exceso de confianza en su propia fuerza generó un acto de temeridad, y el gobierno debió enfrentarse a una reacción militante, especialmente de jóvenes que mostraron su disconformidad en las calles. Creo que esta torpeza terminó con la indecisión de muchos.

Las elecciones del 3 de diciembre de 2018, luego de un sinceramiento en el que todos compartíamos el repudio por una justicia que no era tal, no logró el grado de legitimidad que buscaba el gobierno para sus seleccionados al ganar nuevamente el voto nulo. La Cumbre por la Justicia había reconocido unos años antes, por esta certeza, que la solución había resultado peor que el problema, sumándose a la lacra tradicional de una justicia ímproba el carácter de tener sobre sí la escuálida soberanía popular que le concede mayor impunidad. Los bolivianos hemos descubierto en carne propia el absurdo de ser los únicos en el mundo que elegimos por voto a quienes administrarán justicia.

Sin embargo, había un tercer componente que no adquirió carta de ciudadanía y fue el pacto fiscal. Luego de dos años y medio de reuniones, talleres, encuentros, discursos, declaraciones y paciencia de sospechoso resultado, y estando por conocer la llegada del momento esperado, la propuesta gubernamental no se produjo. O lo hizo de manera mezquina y distractiva.

Tenía que hacerse pública en un momento altamente sensible. Junto con la polémica redacción del artículo 205 de la Ley de Salud, las

principales protestas giraban en torno a las condiciones en las cuales los médicos, en los hospitales, debían cumplir sus labores cotidianas. Falta de condiciones materiales no atribuibles a los médicos y ausencia de personal suficiente, responsabilidades ambas del gobierno central, quedaron en evidencia en un debate que para el común de los mortales resultaba hasta cruel y desubicado cuando lo que se pedía era, simplemente, salud. Era evidente también que la situación tenía su origen en la disminución de recursos de libre disponibilidad del gobierno y una discutible prioridad en el gasto, 9 millones para el Palacio Presidencial de la llamada Casa del Pueblo.

El pacto fiscal era, en esencia, un acto de sinceramiento con la realidad. Se discutieron competencias, condiciones de ejercicio, responsabilidades y recursos para ejecutarlo. Por eso se repite que el presupuesto es el cementerio de los discursos y de los buenos propósitos. En Bolivia hemos aprendido, desde la participación popular, que aquello que no está en una partida presupuestaria no existe.

Están claros los niveles territoriales del Estado, están identificadas las competencias territoriales y las autoridades MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), están claras las necesidades de la población, están claros cuáles son los centros hospitalarios en sus diferentes niveles... sin embargo, algo no funciona. El pacto fiscal tendría que servir para poner en orden los recursos con los que se ejecutarían las leyes. El gobierno central no cumplió y los servicios siguieron deteriorándose.

“La participación popular terminó debilitando al Estado”

Difícil comprender el desarrollo territorial del Estado si el Estado no entiende sus propias lógicas territoriales. La afirmación del subtítulo anterior estaba acompañada de otra igual de temeraria: “al atomizar al nivel local y estrangular al nivel intermedio, encapsuló al Estado al modelo neoliberal” (Viceministerio de Autonomías, 2017).

De las críticas que me ha tocado leer sobre el proceso de participación popular, esta adquirió una provocación de respuesta imprescindible. Y lo hice con otra propuesta política del mismo tenor: sin la participación popular, Morales no habría podido, desde el inicio de su gobierno, llevar adelante su propuesta de poder.

Si analizamos todos los programas sociales y de desarrollo en el territorio, desde Evo Cumple a Mi Agua, y así sucesivamente, la organización política y territorial generada por la participación popular le dio el soporte. Y fueron los cheques repartidos al calor político los que rompieron un

sistema de planificación participativa articulada entre los tres niveles y que ocasionó, precisamente, lo que la autoridad masista criticaba. Cheques firmados por una Embajada hermana iniciaron la ejecución de obras de impacto discutibles y abrieron las puertas al descontrol y la corrupción masiva.

Pero la temeridad del análisis resultaba más complicada cuando se realizaba para sustentar el deseo de un pacto fiscal enfrentado con los operadores. El modelo autonómico se trabó a la hora de la ejecución no por las discutibles 25 alternativas de financiamiento identificadas, sino por la nula voluntad del nivel central para lograr una autonomía financiera real con recursos sólidos. Un gobierno central que considera a los gobernadores y alcaldes como sus antagonicos, desconociendo su calidad de parte integral del Estado, responsables del ejercicio de competencias y aliados en la provisión de servicios públicos en favor de la población, no expresa el mejor espíritu del mandato Constitucional. Uno de los problemas de fondo lo vemos permanentemente con las movilizaciones del sector salud.

El otro tema de futuro, el de la migración y las ciudades, sería imposible enfrentarlo sin los actores territoriales que sufren la presión por la necesidad de servicios. Desde 1992 en que se realizó el primer censo de la democracia bajo el liderazgo de José Luis Lupo, hemos avanzado rotundamente en la comprensión del territorio, el poder y su administración.

El modelo autonómico boliviano tiene dos vertientes que lo identifican; la que nace de la autonomía de la sociedad expresada en pueblos y nacionalidades, y la que afirma la presencia estatal a través de los municipios y gobernaciones. Si la ciudadanía se consolida en el territorio convirtiéndose en la mejor escuela cívica del Estado, mal podría ser entendida como generadora de rupturas.

Como parte de un proceso de la democracia, la participación popular rinde examen todos los días desde hace 25 años. El modelo de las autonomías todavía está en construcción y no nos haríamos ningún favor en olvidar uno de sus orígenes.

El 20 de abril de 1994 se aprobó la Ley 1551 de Participación Popular. Los demócratas y republicanos celebramos. En esa fecha, se abrió la puerta a la inclusión, al territorio y a la Nueva Bolivia que hoy transitamos.

Resulta sencillo hacer referencia al camino recorrido, aunque habrá que recordar que no fue así. La calificación de ley maldita, la resistencia natural de algunos grupos políticos, cívicos y sindicales, la variante de fortalecer la base de la democracia, la comunidad y el municipio sobre las cuales se radicó la autonomía, y la transferencia de recursos reales que resultaba complicada ya que unos años antes habíamos atravesado una de las hiperinflaciones más grandes del mundo, generaron una resistencia comprensible.

Desde el inicio, nuestros nombres, junto a Roberto Barbery Anaya, fueron señalados como responsables de la conducción de un equipo absolutamente *sui generis*; aunque parezca raro, nadie fue parte de él por recomendación partidaria y la selección se completó por mérito, experiencia y compromiso. No se podía improvisar y no habría otra oportunidad.

Por justicia, hubiera sido imposible lograr el resultado sin el respaldo de Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cárdenas, Fernando Romero, José Guillermo Justiniano, honor a ellos que, repetiremos siempre, facilitaron y superaron con sus decisiones las dificultades propias de una coalición que no tenía control en el centro de las propuestas, primero, y en el proceso de aplicación después. De los 22 nombres que compartimos la creación, 14 veníamos del calor del oriente, exuberante e indómito, y habían otros poco públicos como Miguel Urioste, Enrique Ipiña, Sonia Montañó, Herman Antelo, que estuvieron en primera línea.

No hubo invención, se identificó una oportunidad y un alineamiento de capacidades y voluntades. Durante el gobierno del presidente Torres se crearon los Comités Populares de Salud, producto de Alma-Ata, en 1978. El ministro de Salud, Javier Torres Goitia, estuvo en ambas creaciones. El ILDIS, desde la década de los 80 con Carlos Toranzo Roca, coordinaba debates que multiplicaban ideas. El Grupo de tarea inicial, desde septiembre de 1993, se enriqueció con Luis Ramiro Beltrán, Horst Grebe, Margaret Anstee.

El debate parlamentario se inició la tarde del martes 19 de abril y la ley se aprobó a medio día del 20, por tiempo y materia. Concluido el procedimiento y por una emoción especial que se instaló, se cantó el himno nacional, siendo rematado con su número capicúa, Ley 1551.

En la ecuación financiera, la ganancia de todos los municipios era rotunda, aunque tres alcaldes fueron particularmente cuidadosos a la hora de hacer sus proyecciones, Mónica Medina de La Paz, Flavio Clavijo de El Alto, ambos de CONDEPA, y Percy Fernández del MNR, de Santa Cruz. Luego de sendas reuniones y de 15 días de trabajo, aceptaron las nuevas responsabilidades. Entre el domingo 20 de febrero que se presentó el proyecto y el 20 de abril que se aprobó, se abrió el debate más extraordinario desde la sociedad civil, las organizaciones sociales, la academia. El libro *Debate nacional sobre la Ley de Participación Popular*, hoy de colección, recoge parte de él en sus 311 páginas.

CONDEPA tenía su propia línea de reflexión con Julio Mantilla, Andrés Solís y Ricardo Paz. Y se sumaba la vertiente cívica, con Carlos Dabdoub y Mario Cossío como sus protagonistas. Se había heredado el Proyecto EMSO Regional bajo la coordinación de Hernán Paredes, y en la academia, Marcelo Barrón, Juan Carlos Urenda, Iván Finot, Iván Salame y Rubén Ardaya

tenían textos publicados sobre la temática. INIDEM, desde el municipalismo, había acumulado sus experiencias, a las que me tocaba sumar “La descentralización imposible y la alternativa municipal”, texto que movió el interés del poder para transitar de propuesta académica a política pública.

Hoy, el camino va por la revolución urbana y el federalismo. Se trata de respondernos qué se produce y qué podrá producirse en cada territorio para aprovechar y crear condiciones. El extractivismo no deja soñar y le cede el poder al centro que decide por todos.

Los números de inversión que manejaron los funcionarios del agotado proceso de cambio no eran comparables con las cifras exiguas de los tiempos en los que agudizábamos el ingenio para ejecutar políticas públicas.

El gobierno del Plan de Todos, a solo siete años de la hiperinflación, aprobó la Ley de Participación Popular (LPP) con un grado de temeridad incomprensible; la ley maldita estableció los elementos que faltaban para recuperar la gestión del Estado y la democracia en favor de la revolución ciudadana. Como consecuencia, se produjo una irrupción en su manifestación individual y colectiva, produciendo que los territorios tengan responsables con una diversidad de apellidos en el ejercicio del poder. De todos los pueblos y con vestimenta de todas las geografías.

Apareció la jurisdicción y competencia acompañada de recursos, transferencia directa y automática del 20% de los ingresos coparticipables, más 5% en favor de las universidades. La República logró presencia física, con autoridad y servicios que empezaron a ser exigibles. Las funciones se expresaron con autonomía, radicada en municipios y, ahora, Gobernaciones, y con ella se obligó a la intersectorialidad de sistemas integrados en desarrollo humano, económico, sostenible y medio ambiente. Esta forma de operación se reprodujo en todos los territorios de manera orgánica.

Los pueblos, naciones, comunidades y la sociedad civil dejaron de ser una referencia corporativa para convertirse en soporte directo de la democracia a través de las organizaciones ciudadanas que hoy ya compiten por la gestión y el poder.

Se le quitó a los burócratas la exclusividad en la inversión pública y con la planificación participativa los “ignorantes” definieron lo que necesitaban, imponiendo transparencia. Se descubrió la inversión concurrente de esfuerzos con actores públicos, privados y sociales para el desarrollo. Los hospitales, las escuelas, los mercados, la inversión productiva, el turismo, con dolor para el presidente y los ministros, dejaron de aprobarse en la ciudad de La Paz y en las capitales departamentales.

El ordenamiento territorial produjo distritos indígenas, mancomunidades municipales, comunidades productivas, TCO y áreas protegidas, que aparecieron de manera natural. Los ojos se abrieron para obligar al

centralismo a sufrir la soledad angustiada del prepotente al que se le imponen limitaciones.

Suponer que la LPP es dueña de todas las virtudes resulta tan desproporcionado como negarla o desconocerla. En proyección, es un mojón sólido en la construcción democrática de nuestra sociedad. La dialéctica enseña que las acciones son producto de una construcción inteligente, y en ese momento se aprovecharon decisiones de gobiernos anteriores. Las Leyes de Corporaciones, de Municipalidades, SAFCO y el Censo del año 1992 fueron el marco para las decisiones del primer gobierno de Goni. Como lo son para la Ley de Autonomías, que a los funcionarios masistas les costaba reconocer sin atragantarse.

En recursos, no, pero en la profundidad de las decisiones, la LPP le lleva todavía varios cuerpos de ventaja a la gestión de las autonomías departamentales. Esa es la diferencia con el enfoque mezquino que mantuvo en el discurso, haciendo uso cotidiano del instrumento.

Ciudadanía plena: una asignatura pendiente

El Estado boliviano prioriza las organizaciones corporativas, gremiales y sectoriales sobre la ciudadanía. Esta opción, que expresa una definición política y que se manifiesta en confrontación ideológica, arrastra un falso debate conceptual y una rémora democrática.

El debate que prioriza la opción colectivista en el discurso tiene, sin embargo, una contradicción manifiesta en la conducta económica de los actores sociales. Es muy fácil demostrarlo con la constatación empírica de que la distribución del excedente productivo tiene carácter personal/familiar y que está orientada a mejorar las condiciones de una clase media que se fortalece. Paradójicamente, el gobierno del MAS reconocía con cifras que ha crecido significativamente, mientras la crítica ácidamente por semejarse al antagonico ideológico.

Sin embargo, el espacio en el que la contradicción es más peligrosa y manifiesta es en el político. Se ha tratado de construir un Estado corporativo de sostenibilidad cada vez más complicada y costosa. Cuando las negociaciones de políticas públicas se llevan a cabo en ámbitos corporativos, empresariales, comunitarios o sociales, exclusivamente con los actores involucrados y prescindiendo de la ciudadanía y de la sociedad integral, lo único que se logra es el debilitamiento de la gobernabilidad democrática. Pareciera que se consigue la paz social con un falso espejismo, ya que ella estará sometida a negociaciones permanentes y no a consensos democráticos sólidos.

Una hipótesis permite interpretar el comportamiento de nuestra política en su impronta corporativa y sindical, y las consecuencias que ello tiene en nuestra vida cotidiana.

La expresión corporativa se identifica con la relación sindical, y es el pliego petitorio la síntesis de la capacidad negociadora y la gobernabilidad trasladada a la política. Vemos todo el tiempo que si las demandas del pliego se responden positivamente, se celebra con fiesta y el poder se legitima. Cuando la respuesta no es satisfactoria, se abre un proceso de negociación y conflicto. Este proceso puede estar acompañado hasta de violencia extrema y concluye, casi mágicamente, cuando se resuelve, se desmoviliza y se vuelve a la celebración y la fiesta.

Si el conflicto corporativo continúa sin resolverse, adquiere un escalamiento en espacio, tiempo, actores, y las demandas asumen la calidad de “lucha hasta las últimas consecuencias”. En el pedido extremo aparece el ultimátum, y en ese momento la estructura estatal es una simple formalidad que se juega en la capacidad de sus negociadores que deben legitimarla con el resultado. Adquieren valor secundario los 2/3 del Parlamento o el porcentaje del voto alcanzado en las elecciones, que servirán para recordar que el gobierno puede pretender resolverlo usando la violencia legal. Las consignas se simplifican y solo se espera la respuesta demandada.

Estamos viviendo un proceso de esa naturaleza y en las puertas de comprobar todo el tiempo los límites de la legalidad y la legitimidad. Sabemos cómo empezó el conflicto. La fiesta que celebrará su final a veces se aleja por la complejización de las demandas. El MAS utilizó este instrumento para ascender al poder y debió enfrentarlo en sus consecuencias. Mientras la ciudadanía no tome control del conflicto corporativo, nuestra democracia será presa del chantaje.

La ciudad, el estatuto y la reelección

La creatividad política oficialista boliviana desarrolló una competencia de inteligencia para demostrar la legalidad de la reelección indefinida del expresidente Morales. Cuanto más profundos eran los argumentos que demostraban las violaciones que acarrearía el intento oficialista, más cínicos eran los que trataban de fundamentar el sí; un raro olvido de dos referéndums, de la aprobación de la Constitución y del 21 de febrero de 2016 trató de esconder, sin éxito, que el pueblo había dicho No.

En el espacio regional cruceño abrió otro debate sobre los alcances de la autonomía, y si esta correspondía a la que se encontraba expresada en el estatuto observado por el control de constitucionalidad. Está claro que

los alcances teóricos de la gestión pública diferirán de las posibilidades que planteen las limitaciones políticas, económicas y mentales, y que así se abre precisamente el espacio para la creatividad y la innovación. Otra vez, y esta vez en el espacio de los voceros de la Gobernación, se trataba de explicar las condiciones objetivas existentes que obligaron la aprobación, mientras escuchábamos las observaciones de quienes consideraban que habría sido mejor seguir sin estatuto a tener otro que no expresaba la voluntad soberana.

En este tema y con la experiencia alcanzada por la práctica, sabemos que más vale una ley en mano que un proyecto perfecto. De no haber sido así seguiríamos discutiendo la ley maldita de la participación popular y escuchando los discursos contrarios que se expresaron en el campo cívico, sindical y gremial. Lo imperfecto abre la posibilidad al cambio, contenido implícito de las críticas cuando son fundamentadas.

Simultáneamente a estos dos escenarios, hay otro que fue dejado en lista de espera sin las consideraciones necesarias que permitieran el empoderamiento colectivo, el de la ciudad. Repitiendo los argumentos y las proyecciones, el año 2032 el 90% de la población boliviana vivirá en ciudades producto de una tendencia natural, agudizada por la presión migratoria de servicios públicos no resueltos, la gran extensión de nuestro país, el cambio climático y la ausencia de una política pública que se conduela de esta realidad. La economía lleva a la gente a las ciudades, a vivir en la informalidad y a debatir todo el tiempo los problemas de la falta de oportunidades laborales, los mercados, el transporte y la seguridad ciudadana.

Las ciudades están cobrando factura al haberse perdido el instrumento de la planificación urbana, al actuarse bajo la presión de la coyuntura y desconocerse la necesidad de tener una Casa Grande en la que podamos vivir sonrientes, trabajando y gozando de nuestro ocio productivo. Luego de que se imponga la racionalidad y se superen las trabas masistas, seguiremos viviendo en ciudades inconclusas, sometidas a la especulación inmobiliaria y a la presión de intereses gremiales que convierten nuestras calles, literalmente, en un mercado. Y no solo en los centros de acopio y alimentación.

Ciudades metropolitanas y ciudades intermedias son el escenario de la democracia y en ella viven los jóvenes y están las redes que mueven el pensamiento.

Un Estado en transición a lo federal

El 9 de febrero del 1825 el general Sucre convocó a los diputados de las cinco provincias del Alto Perú a reunirse en Congreso para definir su destino. Mientras para algunos los libertadores continuaron con un modo

político cambiando el monarca por un presidente, para otros, y visto en perspectiva, fue la construcción de un tipo de república que toma el modelo de la Revolución francesa y norteamericana, e incorpora lo criollo con su sello indeleble. La creación de la República de Bolívar siguió los avatares que conocemos, con grados de incomodidad por el cuestionamiento de la población frente al poder y la economía.

Para cuestionar más lo ocurrido en 1825, hoy estamos frente a un modelo institucional y social que podría definirse entre la “reconstitución del Ayllu”, la “Nación de los Indios Chiquitos” y la “República del Chapare”. Si bien no deben compararse momentos históricos de condiciones distintas, el reconocer el momento en que se generan nos ayuda a comprender las categorías.

Si bien la República de 1825 era solamente para varones, ricos y letrados, y la mayoría, que alcanzaba a un 90% de la población, quedó fuera, desconociéndole la república aristocrática sus derechos culturales, territoriales y políticos, como señala Gustavo Rodríguez Ostria, resultaría imposible negarla como un elemento de reforma frente al ayllu andino.

La “Nación de los Indios Chiquitos” presente en las crónicas del siglo XVIII es el territorio de la Utopía para las artes en todas sus manifestaciones culturales, la fe compartida por el jesuita y un modo de producción social capaz de cubrir necesidades y generar bienes materiales, culturales y espirituales. Este no es un escenario apto para lectores de breviarario (cfr. Molina, 2019).

Como apunta críticamente Leonardo Tamburini:

los jesuitas y su proceso generaron una etnogénesis muy peligrosa que redujo decenas de pueblos con idioma, cultura, sistemas de autoridades y economía propia, transformando a pueblos cazadores, recolectores, pescadores y de economía itinerante, en culturas sedentarias, ganaderas y agrícolas, con una utopía más ilusión de los padres que aspiración de los neófitos. (en Molina, 2019: 106)

Hechos que tampoco sería bueno desconocer, aunque no comparto la totalidad de sus argumentos.

Por otro lado, la República del Chapare, como construcción simbólica, es un espacio imaginado al margen del Estado que lo contiene. En él se produce un modo económico de negociación en el cual el excedente de la coca no genera relación de reciprocidad con la sociedad nacional, sino con los directamente involucrados. En la peor situación de ingenuidad, el poder del Estado negocia el uso de la violencia en el territorio. Describir la situación complicada del Chapare resulta motivante porque nos obliga a

enfrentar una conducta que la consciencia internacional nos interpela sin ninguna duda, mientras en Bolivia la encubrimos.

En todos los casos, la categoría 'federal' atraviesa la vida institucional y política del Estado boliviano desde su génesis por los elementos que la identifican: primacía territorial, grado de autonomía interna y relacionamiento negociado con la otra parte de la sociedad nacional. Desde los paros departamentales hasta la integridad del territorio son una muestra de ello. Aunque nos cueste aceptarlo.

Analizo el tema federal como una provocación entrañable para los nacidos en los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Potosí, y dirigida a donde se encuentre en todo el territorio nacional.

Estudiando el patrón migratorio de las zonas rurales y el crecimiento poblacional de las ciudades de esos tres departamentos podemos prever un despoblamiento cada vez más acelerado; son las razones, el cambio climático, la ausencia de satisfactores básicos que van desde la salud, educación, energía, agua, hasta los procedimientos administrativos de carnetización, registro civil, oficinas bancarias, juzgados y ausencia de centros de apoyo económico.

Oruro tiene 35 municipios, de ellos, 27 tienen una población menor de 10.000 habitantes con carencia de la mayoría de las condiciones señaladas, y por ello con dificultad para mantener la población en el territorio. En el departamento de Chuquisaca, de diez provincias, siete ya tienen crecimiento negativo, es decir, pierden tendencialmente población entre los últimos censos. Y Potosí, en su área altiplánica, tiene una población con similar comportamiento.

En las actuales condiciones económicas del Estado y luego de 10 años de ingresos exorbitantes que no modificaron estructuralmente los índices de desarrollo de manera real, podemos suponer que la población de esos territorios no recibirá súbitamente lo que necesita, y a pesar de que se construyen escuelas, microhospitales, carreteras o aeropuertos, hay un componente ausente en torno al desarrollo económico expresado en la falta de oportunidades, porque están relacionadas a condiciones internacionales de mercados y precios para los productos de la tierra.

Por la realidad boliviana –gran extensión y poca población en relación al territorio–, estamos frente a una situación estructural para la que el gobierno central no ha ofrecido una estrategia integral de desarrollo rural y urbano; a las observaciones que se formulan, recibimos respuestas sobre la realización de obras dispersas de dudosa sostenibilidad. Para decirlo de otra manera, si los habitantes de las áreas rurales, principalmente de esos tres departamentos, esperan soluciones prontas y efectivas del Poder Ejecutivo central, ellas tardarán en llegar y no hay razones para suponer lo contrario.

En la historia de Bolivia, el federalismo fue condenado por las oligarquías mineras y el poder militar, y se acompañó como chantaje por una supuesta ruptura de la soberanía territorial, enjuiciándose a las voces que reclamaban decisiones a gobiernos lejanos sobre las necesidades de la gente. Sin embargo, en el estudio de soluciones reales y efectivas, encontramos que estas vendrán solamente si los habitantes, desde los territorios, las asumen y deciden radicalmente.

¿Pueden ser acusados de contrarios a la unidad nacional los habitantes de Chuquisaca, Oruro y Potosí que, frente a una tendencia inexorable que los condenaría a la pérdida de población y por ello a una expectativa de desarrollo, demandan mayor autonomía para planificar y ejecutar su futuro antes que disminuyan sus posibilidades reales? Esa es una pregunta cuya respuesta tendríamos que escuchar de los habitantes de los nueve departamentos, pero principalmente de aquellos que están en situación más desventajosa.

Históricamente, esto no es nuevo.

Todos [los departamentos] viven completamente aislados, sin relaciones de ningún género; sus intereses los relacionan más bien con pueblos de las repúblicas vecinas. Solo están unidos por la tiranía y por la bayoneta del más audaz, que nutre al ejército que lo sostiene y a los parásitos que lo adulan. [...] En el sistema federal, bastaría el orden en la administración y recolección de los fondos del Estado, para que se duplicaran nuestros ingresos. (Romero, 1878: 30)

Los argumentos no se han modificado mucho. Y en este afán de encontrarle utilidad al millón de km² de territorio que el año 2032 tendremos sin masa crítica poblacional, he encontrado tres fuentes de ingresos sociales y de generación de excedente sostenible que ofrecerán mano de obra y trabajo digno a millones de habitantes. Sin extractivismo suicida ni depredación irresponsable.

Rolf Köhler Perrogón, ex director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), dice:

Si el país tuviera 6.9 millones de hectáreas con agricultura, 13 millones de cabezas de ganado bovino, 17 millones de hectáreas de bosques nativos bajo manejo forestal y 247.000 hectáreas de plantaciones forestal comerciales, el sector agropecuario y forestal puede generar 8.896 millones de dólares anuales para Bolivia.

Los recursos económicos originados por el sector agropecuario y forestal significarían casi el doble de lo que genera la minería y el gas actualmente,

dejando el país de depender históricamente de los recursos naturales no renovables. (2018: 76)

Por el lado de la quinua, encontré esta belleza:

De las 16.5 millones de ha. de todo el altiplano boliviano (desde la ribera sur del Lago Titicaca a Villazón) existen cerca de 8 millones de ha. de tierras áridas, desiertos y semi-desiertos, al margen de tierras relativamente fértiles. Se trata de utilizar 1 millón de ha. de esas tierras yermas, para el cultivo de la Quinua Real orgánica.

El estudio plantea crear 400 unidades de 5.000 has, con una capacidad mínima de producción de 5.000 toneladas métricas anuales (2.5 TM por ha). El ingreso que obtendría cada una de estas unidades sería de unos 5.000.000 \$us, con un precio de la quinua alrededor de 2.000 \$us/TM, considerando que ha llegado hasta 10.000 \$us/TM. En este escenario conservador, el país obtendría mínimamente 2.000 millones anuales por concepto de exportación. (Curi, 2020)

Y desde el turismo, las noticias están en la red. En 2016 “Bolivia fue galardonada como el Mejor Destino Cultural de América del Sur por la consultora World Travel Awards, conocida como los ‘Óscar’ del Turismo” (*Página Siete*, 2017). “El 2013 la industria del turismo en Bolivia generó divisas por valor de \$us 544,3 en turismo receptivo y en el global, incluyendo los \$us 479,8 millones de turismo interno, \$us 1.024.082.861. El turismo representa un 4,57% del PIB nacional” (Bolivia Emprende, 2014).

“El turismo genera \$us 693 millones en 2015. En cuanto al número de turistas extranjeros, el año pasado visitaron el país 1,13 millones de personas, un 4% menos respecto a los 1,18 millones reportados en 2014” (*La Razón*, 2016).

Soy radicalmente optimista en este tema. Proyecciones a mano alzada señalan la posibilidad de un ingreso superior a los 3.000 millones de dólares anuales si tomamos en cuenta la capacidad instalada en este momento y hacemos las cosas incluyendo a la gente, resolviendo algunos cuellos de botella que ya están estudiados y declarando el turismo sostenible como política pública.

Tres rubros, agropecuario y forestal, quinua y turismo, esperan la dinamización de una economía desde la gente y en el territorio. Las autoridades territoriales, gobernadores y alcaldes tendrán que hacer escuchar su palabra. El nivel central estaba preocupado con el excedente del gas y la reelección, y ese no era el camino.

Las ciudades en el escenario político

Vivir en una ciudad obliga a reconocer y aceptar un conjunto de exigencias que son consecuencia natural de hacerlo junto a otros, en comunidad y cercanía.

La isla individual adquiere la calidad de archipiélago social, compromiso de relacionamiento y obligaciones que interactúan; quienes vivimos en ciudades debemos compatibilizar nuestras necesidades y expectativas para que se sumen a las que poseen los que viven en el mismo espacio. La suma de esfuerzos colectivos y de organización imprescindible permite que el uso del tiempo individual, favorecido por economías de escala en servicios públicos, adquiera el respeto al ocio productivo que nos merecemos.

Nuestra investigación deja en evidencia la ausencia de consciencia urbana en la sociedad. Se verifica la falta de cumplimiento de exigencias básicas, propias de necesidades colectivas. La lista pasa por los modos de enfrentar el tema de la basura, carente de separación; la ausencia de disciplina mínima en el transporte que se vuelve un caos y un atropello; el estado deplorable de los mercados y la existencia de sistemas de organización que priorizan el desorden y los grupos gremiales por encima del interés colectivo; carencia de procedimientos expeditos y amigables en favor del administrado, que debe realizar filas inmisericordes para trámites básicos e imprescindibles, con una carga latente de corrupción e indefensión; la seguridad ciudadana, en manos de la negociación y el chantaje por su administración desde el interés político; la inexistencia de espacios con calidad de bienes públicos en proporción a las necesidades de la población. Cada una de estas situaciones, y las que siguen en la lista larga de insensibilidades públicas, se resumen en la ausencia de respeto al consumidor, al administrado y al ciudadano en una nueva forma de violación de derechos humanos.

De las muchas razones que encontramos, tres adquieren la calidad de paradigmáticas y necesitan ser enfrentadas.

La improvisación en la gestión pública, carente de servidores formados en el ejercicio de capacidades e idoneidad. La falta de voluntad y creatividad se expresa en una constatación empírica: en la era de la cibernética, la robótica y la nanotecnología, la gestión sigue siendo manual en una gran parte del proceso. Y la ausencia del presupuesto colgado en una página institucional, con ejecución a tiempo real, deja en evidencia los intereses del ocultismo.

La segunda razón está en una sociedad que no asume la exigencia de vivir en un orden urbano, imprescindible y creativo; los procesos migratorios realizan presión sobre los servicios, pero la carga que debe ser soportada por la llegada o el abandono de territorios no responde a una

definición de emergencia nacional que debiera adquirir el fenómeno. El Estado boliviano fomenta la presión migratoria y los parches de coyuntura no lo liberan de la responsabilidad frente al futuro; repetiré hasta el cansancio que en el año 2032 el 90% de los bolivianos viviremos en ciudades.

Finalmente, el Estado y la sociedad conviven en un escenario que pondera lo originario indígena campesino, respetable desde el punto de vista político y electoral que le ha dado tanto resultado al MAS, pero difícil de sostener desde el punto de vista de políticas públicas.

Cuando escuchamos declaraciones y leemos entrevistas de las autoridades nacionales, comprobamos la ausencia de consciencia oficial sobre la materia.

Aproximación al estudio de las ciudades intermedias

El estudio sistemático de las ciudades intermedias en Bolivia se inició en el CEPAD el año 2012; luego de las investigaciones básicas y acumulación de información, gracias al apoyo de la Fundación SOLYDES y la Fundación SEMBRAR, se realizó y concluyó el año 2017 con la investigación “Ciudades Intermedias como Nodos articuladores para el Desarrollo”.

El estudio realiza el análisis de siete variables sectoriales que se desagregan en información concreta, comparable y medible de potencialidades, necesidades y deficiencias que inciden directamente en la permanencia de las personas en el territorio o, en el caso de ausencia de condiciones, en mayor presión migratoria: 1) Marco institucional; 2) Desarrollo económico local; 3) Emprendimiento; 4) Ambiente; 5) Turismo; 6) Género; y 7) Juventud.

La investigación se realizó inicialmente en cinco ciudades, representativas de la realidad territorial boliviana: Mizque, Cochabamba; Cercado, Tarija; Riberalta, Beni; San José de Chiquitos, Santa Cruz; y Sorata, La Paz. Hoy la investigación cubre 15 ciudades intermedias, estratégicamente ubicadas en el territorio nacional para tener una muestra territorial representativa.

Como todo proceso en construcción, el de las ciudades intermedias busca identificar dinámicas, sistematizar conocimientos, estudiar los actores académicos, políticos y sociales que intervienen, y explorar propuestas prácticas que existan en el continente.

La democracia, al convertirse en bien público, ha dejado de ser preocupación para una porción de la población que se ha curado de la vida política activa sin haber participado de ella. Las generaciones que se formaron después de octubre del año 1982, cuando se restableció el Estado

de derecho, no han tenido una relación de preocupación y lucha para lograr las condiciones que se necesitan para una vida en sociedad, pacífica y respetuosa. El aparato administrador de la violencia legal actuó de manera selectiva sobre personas y grupos para no dar la sensación de que se estuvieran violando los derechos humanos y las condiciones básicas de justicia y libertad. Sin embargo, y mirando el conjunto, resulta muy difícil sostener que no fue así.

La división de poderes y el cumplimiento de los pactos sociales que permiten la paz colectiva fueron puestos a prueba frente al intento de repostulación del expresidente Morales, que “no será impedido por un apego abstracto a la norma”, como lo dijera el exvicepresidente Linera. La frase resulta violadora de la democracia y, si fuera trasladada a la voz de cualquier opositor de entonces, habría sido calificada de subversiva por el poder. Sin embargo, no fue analizada en ese contexto y pareciera haber pasado desapercibida.

Simultáneamente, se están produciendo procesos de ejercicio cívico que resultan altamente auspiciosos para lograr las condiciones que necesita Bolivia para desarrollarse en democracia. La posibilidad de acceder a la información de manera directa, sin intermediarios, sin filtros, a veces con entusiasmos desbordantes, está logrando demostrar que los ojos ciudadanos llegan más allá de los discursos distractivos. Y ya no le resulta tan fácil al poder ser creído solamente porque tiene la autoridad.

La vida en ciudad, en contigüidad, en cercanía humana, establece vínculos muy fuertes entre quienes tienen la necesidad de convivir bajo condiciones de libertad y transparencia. La posibilidad de manipular conductas tiene que superar la prueba de la información y las redes sociales, y las plataformas están demostrando una capacidad de movilización que incomoda al poder que no sabe cómo librarse de ellas. En realidad, el modo habría sido muy simple, pues bastaba con cumplir la Constitución y el Referéndum del 21F para que se restablezca un escenario de racionalidad. El no hacerlo puso a prueba, una vez más, la capacidad de movilización y reacción de una ciudadanía urbana, informada y activa.

Las ciudades resilientes, como se conoce a los espacios con población de ciudadanos conscientes, suman a la información otras cualidades, como el fortalecimiento de redes de solidaridad, conciencia ambiental, demanda de ocio productivo, cohesión social, conductas que facilitan los procesos de empoderamiento. La Bolivia urbana que se equilibra con la rural es la mejor garantía de fortalecimiento democrático. En América Latina hoy se escucha la frase: “hay que escuchar a las ciudades”.

La revolución urbana que se está produciendo en Bolivia está empezando a construir, por fin, una agenda para las ciudades. Esta agenda

modificará radicalmente la forma de organizar y ejecutar la política. Para eso, la mejor manera de darnos una respuesta a la pregunta de la sostenibilidad es realizar un examen comparativo de los instrumentos de medición existentes en ámbitos internacionales. En este aspecto, lo repito, la comparación no es con nosotros mismos, sino con quienes han logrado darse respuestas adecuadas que les han permitido solucionar el problema. Y no podremos lograr una solución integral si no aceptamos primero las condiciones que nos impone la realidad: aceptar que vivimos en ciudades con la informalidad como inquilina, dos condiciones ineludibles.

La ciudad, como espacio vivo en el que interactuamos cotidianamente, requiere de un grado de consciencia y conocimiento para que podamos asumirnos sus habitantes. Es una combinación de vivienda en casa propia y de enamoramiento festivo el que necesitamos para eso. Es nuestra casa grande, con plazas que son el patio y sus espacios la sala y el lugar donde nos reunimos en familia. Aunque parezca básica la metáfora, es la única manera de comprender la complejidad que nace de esa relación que debe ser de respeto y convivencia grata.

Por eso debemos resolver la agenda de los Burgos de la Edad Media. Construidos en el periodo calificado de revolución urbana y comercial desde mediados del siglo XII, eran barrios formados en torno a un mercado que se había establecido al lado de una iglesia o fuera de las murallas de ciudades preexistentes. Correspondió a los Burgos resolver la organización de los habitantes, el uso del agua, los desechos, el espacio público, la seguridad, los suministros, las fiestas, el tránsito y el lugar para los animales. En alguna de nuestras ciudades seguimos todavía con temas de esa agenda. La palabra ‘burgués’ significaba, en su origen, “habitante de un burgo”. Y por eso su administrador se llamaba burgomaestre.

Para comprender la administración del espacio urbano/rural como un continuo, debemos aceptar que las ciudades no producen agua, comida y energía de manera autónoma y suficiente, y por tanto, debemos tomar consciencia que nuestro espacio urbano llega hasta donde necesitamos proveernos de algo que no tenemos. Esto genera flujos y relaciones de complementariedad y dependencia.

Cuando vamos a una pulpería, un mercado barrial o a un supermercado metropolitano, el conjunto de productos que se expenden deja en evidencia, sin que nos demos cuenta, las distancias superadas desde donde se produjo el producto para que podamos consumirlo, y la gestión que tiene que haberse cumplido para llegar hasta nosotros. La sociedad industrial incorporó calidad y variedad, y el marketing, la presentación que tanto conflicto genera a nuestra calidad de consumidores despistados que no mira la fecha de vencimiento.

Cuando al tomate que compramos le ponemos rostro humano, estaremos recibiendo el calor de la mano que lo recogió. Y todas las marcas de los productos tienen un lugar de origen.

En 23 municipios/ciudades se encuentran 6.000.000 millones de habitantes, es decir, el 60% de la población boliviana, sobre datos del Censo del año 2012. De estos, solo cinco municipios se encuentran fuera de las áreas metropolitanas: Yacuiba, Riberalta, Villa Tunari, San Ignacio de Velasco y Yapacaní, sumando, entre ellos, solo 364.756 habitantes. En los restantes 317 municipios hay 4.000.000 de habitantes, distribuidos en 1.090.000 km².

La nueva agenda de las ciudades

Vivir en ciudades es una de las condiciones que la población mundial debe aceptar. Esa condición llega, obviamente, a Bolivia, aunque todavía no tengamos consciencia de lo que ello significa. La ausencia de respuestas a retos fundamentales como la gestión integral de los residuos sólidos, por ejemplo, situación que ninguno de los gobiernos locales bolivianos tiene resuelta, lo demuestra. Similar situación debemos enfrentar con las aguas residuales.

Además de esta situación que debe ser enfrentada con una combinación de conductas individuales, colectivas y políticas públicas, hay otras que se generan fuera de nuestro territorio y cuyas consecuencias deben tener respuesta en los niveles locales. El solo enunciado de ellas dejan en evidencia su importancia: los procesos migratorios, el cambio climático, el valor comercial de la tierra, la aprobación de políticas públicas de impacto, el imaginario colectivo urbano-rural que define patrones de comportamiento, los precios internacionales de nuestros productos, las dinámicas locales generadas por influencias de mercado o demandas externas, la investigación científica y/o aplicada, la fabricación de tecnología y la innovación. Cada una de estas categorías, y no son las únicas, definen comportamientos y conductas locales sin tener la posibilidad de modificar sus causas.

Sobre las tendencias migratorias, insistimos con la reiteración, rayana en la testarudez, que existen cinco verificaciones cuyo patrón tampoco podemos ignorar:⁸

1. los procesos migratorios rural-urbano, urbano-urbano, nacional-internacional, continuarán, pues son una tendencia mundial;

8 Son hallazgos evidenciados y validados en nuestros encuentros internacionales.

2. esta tendencia genera el despoblamiento rural, el abandono de extensiones territoriales productivas en alimentos básicos y el incremento del costo de los servicios en las áreas rurales;
3. al producirse la migración hacia las ciudades y áreas periurbanas, se produce una presión que demanda servicios básicos e infraestructura para la cual las ciudades receptoras no están preparadas;
4. no existen antecedentes de retorno poblacional masivo a los territorios de origen abandonados, y
5. las políticas públicas aplicadas hasta ahora no han modificado la tendencia de abandono del campo y las zonas rurales.

A estas cinco condiciones se suma la constatación de que las ciudades no producen comida, agua ni energía en cantidades autónomas, cuya exigencia, si no se incorpora al análisis, generará consecuencias previsibles, como ya lo estamos viendo.

Ese es el escenario de aparentes inflexibilidades sobre el que venimos trabajando y sobre el que aún estamos en condiciones de realizar un aporte boliviano. Son propuestas de consideración urgente, y con esa urgencia las estamos presentado en cuanto espacio se abre, reiterando que no se trata de un acto de fe, ni de una reflexión esotérica, es el resultado de una investigación de largo aliento, compartida en 10 encuentros internacionales y verificada en un estudio de campo realizado en 15 ciudades intermedias de Bolivia.

Hemos encontrado que, para enfrentar esta situación, se requiere formar una red de ciudades intermedias con calidad de nodos de servicios públicos; que en ellas se fortalezca la cohesión social en torno al turismo sostenible; que se ejecuten acciones de desarrollo económico local que alienen seguridad alimentaria; y que se logre el mantenimiento territorial de la población con existencia de caminos, energía y programas de vivienda digna. Esas condiciones demandan acciones inmediatas que no se están cumpliendo ni en la sociedad ni en el Estado.

La metropolización

La construcción de regiones metropolitanas en torno a las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz se verá facilitada por experiencias que ya han logrado resultados en otros lugares. Afirmo que hay solución para todos los retos que enfrentamos y bastará identificar las preguntas para buscar e innovar las soluciones. La inteligencia estará en encontrar cuál es la variable esencial y ordenadora del trabajo colectivo, que si no se la trabaja

adecuadamente, podría generar dificultades. ¿Se trata de desarrollo de servicios, economía, transporte, seguridad ciudadana, turismo? Identificada, será más fácil ejecutar un proceso consistente de cohesión social.

Se necesita considerar el crecimiento poblacional del eje central y de sus capitales por razones de atracción, al mismo tiempo que debe incorporarse la presión migratoria y el despoblamiento rural para realizar proyecciones y adecuar la ejecución de políticas públicas correctivas.

Hemos llegado a un grado de certezas luego de estudiar el fenómeno en dos dimensiones; un estudio de ciudades intermedias en Bolivia que nos ha proporcionado un instrumental de aplicación práctica con un sistema de medición, y un análisis comparado internacional a través de 10 encuentros internacionales y el estudio de 18 experiencias de América Latina y España.

Estamos en condiciones de identificar las variables que inciden en la expulsión poblacional de las áreas rurales y de ciudades pequeñas. La presión migratoria se produce cuando parte del trabajo familiar no se monetiza, cuando existen actividades económicas de ingresos bajos y la infraestructura de servicios básicos es deficiente. La poca densidad poblacional que encarece los servicios, el desconocimiento/ruptura de realidades sociales, culturales y comunitarias en territorios marginados de los circuitos económicos con menores opciones de consumo y distancias terminan idealizando la vida en las ciudades.

Igualmente, ya podemos identificar las variables de atracción de las ciudades que juegan en el imaginario de las personas. Acceso a actividades económicas de mejores ingresos, oportunidad de acumular activos financieros, acceso a servicios básicos y sociales, a circuitos generadores de riqueza que ofrecen mayores oportunidades de consumo y acercan el concepto idealizado de modernidad, alejándolo de lo rural como valoración negativa.

Nuestra investigación ha identificado algunas preguntas para enfrentar el fenómeno. ¿Es inevitable que la gente viva en grandes ciudades? ¿Lograremos construir un camino concertado entre las visiones y los intereses plurales de quienes definen las políticas públicas en sus niveles nacionales, departamentales y locales? ¿Cuál es la agenda de actividades y cuál la ruta crítica definida en tiempos y tareas?

Todo esto alcanza utilidad práctica al estar acompañado de una propuesta de agenda que sugiere la dimensión de lo que necesitamos hacer. Lo primero, obviamente, es el trabajo orgánico sobre las áreas metropolitanas para la construcción de una agenda compartida, además de la incorporación de políticas públicas para consolidar ciudades intermedias con calidad de red y de nodos de servicios que permitan que la gente no se

vaya más lejos a la hora de necesitarlos. Aparece la necesidad de consolidar la sostenibilidad de los territorios, la generación de economía, trabajo y empleo para jóvenes y mujeres, ocio productivo y vivienda digna.

Las dimensiones de las ciudades. El caso de Santa Cruz de la Sierra

Se está abriendo el debate nacional de manera natural sobre la realidad de las ciudades, el espacio público y la construcción de un imaginario urbano. Las opiniones están desembocando en la sostenibilidad urbana a partir de un sujeto social que ofrece las condiciones para la investigación, el estudio y las políticas públicas en la ciudad.

El reto es apasionante. Santa Cruz de la Sierra tiene 1.800.000 habitantes, con un área de influencia de 2.500.000 habitantes, que en 13 años aumentará a un conurbano de 5.500.000. La ciudad, además, tiene un área de influencia y expansión que sale de Bolivia y llega, por sus proyecciones económicas, a 40 millones de habitantes más allá de nuestras fronteras, lo que define el grado de importancia y potencialidad del espacio del que estamos hablando.

Una secuencia del crecimiento de la ciudad puede ayudar a comprender el fenómeno:

1. 1830 : 3.908
2. 1854 : 5.625
3. 1870 : 10.000
4. 1900 : 18.335
5. 1922 : 20.617
6. 1932 : 23.841
7. 1950 : 43.000
8. 1956 : 50.000
9. 1960 : 70.000 (proyección a 180.000 en 20 años)
10. 1976 : 254.682 (proyección a 835.000 en 2000)
11. 1992 : 697.278
12. 2001 : 1.135.526
13. 2012 : 1.756.926 (2.200.000 área metropolitana)
14. 2022 : +/- 3.5 millones (área metropolitana)
15. 2032 : 5.5 millones (región metropolitana)

Necesitamos vivir en una ciudad que acompañe el proceso de desarrollo humano y sostenible, con habitantes que asuman la importancia de

este momento y con las ideas claras del salto que debemos dar. Tomando en cuenta las contradicciones económicas y sociales, constatamos que el crecimiento de la ciudad ha sido más vertiginoso que las ideas y la gestión que la está administrando.

Los textos urbanísticos y recomendaciones de las Naciones Unidas dicen que las ciudades no deberían crecer a más de una tasa del 4% anual, ya que se vuelven de crecimientos inmanejables. Santa Cruz crece, desde hace casi una década al 6,5% anual, y nada parece indicar que eso se vaya a detener,

dice Ignacio Conese en su artículo “Santa Cruz de la Sierra, la nueva ciudad estrella de América Latina”. Y concluye: “Santa Cruz no es una ciudad fácil, y la famosa hospitalidad cambia viene con una letra chica que no se anuncia en las publicidades oficiales. Sin embargo, vibra. Se reproduce a tasas exponenciales” (2019).

Existen muchas experiencias sobre el desarrollo de las ciudades y nos encontramos explorando los caminos más sostenibles hacia una ecología urbana. “La ecología urbana es la ciencia que nos ofrece la oportunidad de reconciliar las ciudades y a sus habitantes con el medio ambiente y la biodiversidad. Es un paso necesario para conseguir la sostenibilidad total” (Cinconoticias, s.f.).

Santa Cruz de la Sierra, por su dimensión poblacional, territorial y recursos, tiene la posibilidad de convertirse en un paradigma de ciudad sostenible en América Latina. Nos corresponde recuperar el tiempo para alcanzar la calidad de ciudad inteligente cambiando una infraestructura gris de cemento por una infraestructura verde.

Las ciudades están cambiando permanentemente, y corresponde aprender de quienes avanzaron y ya resolvieron nuestros problemas para innovar y adecuar los instrumentos, ajustarlos e integrarlos a la preocupación humana por el cambio climático, la ecología social y la ecología urbana.

El reto es mayor cuando comprobamos que nuestra agenda urbana es válida para todas las ciudades de la república; hablar de incorporar una concha acústica, mercados turísticos, áreas públicas recuperables para recreación y actividad física en el entorno del río Piraí, habilitar un espacio para un mercado de pulgas, crear rutas turísticas urbanas, integrar los sistemas culturales o construir glorietas en las plazas para encuentros y retretas, puede elevar el debate y la fisonomía de nuestras ciudades sin mayores costos que el que tienen las acciones improvisadas, y superando aquello de lo que aparentemente no podemos salir, ligado a mercados desordenados y sucios, tráfico inseguro y caótico y basureros colectivos.

Asumamos que este debate, y este enfoque, pueden servir para todas las ciudades, los municipios y la gente que puebla nuestro territorio.

El gobierno del espacio rural

Santiago de Chile fue sede del XIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA);⁹ el Congreso debatió en sus once comisiones la nueva agenda para el desarrollo de América Latina desde la visión y la experiencia de las autoridades locales. Las crisis de gobernabilidad democrática que sufren muchos de los gobiernos nacionales se superan en los gobiernos locales por la necesidad de resolver responsabilidades cotidianas que no admiten prórroga.

Una vez más, la democracia en el continente está volviendo su atención hacia el poder de la ciudadanía que se consolida en los gobiernos locales. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se pregonan con tanta ligereza por los gobiernos centrales se medirán en su eficacia en los resultados que se alcancen en los territorios donde vive la gente.

Frente a la creciente urbanización y el crecimiento de las ciudades, sus gobiernos locales deben asumir un protagonismo real para el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo. Durante las últimas décadas, numerosos acuerdos y cumbres internacionales han puesto el acento en promover la implementación de nuevas agendas urbanas. (FLACMA, 2018)

La exigencia de administrar el territorio de manera integral plantea desafíos de desarrollo sostenible que reconocen la complejidad y los problemas de la ciudad y de la ruralidad como un continuo. La dicotomía entre lo urbano-rural desaparece cuando se evidencia que en las ciudades no se produce agua, energía ni comida, y los espacios de donde vienen esos elementos vitales deben tener resueltas las necesidades de la gente que vive en ellos.

En ese escenario aparece la necesidad de analizar la existencia de ciudades intermedias que cubran los espacios, reitero, con servicios, cohesión social, turismo y seguridad alimentaria, y en ellos se resuelvan las diferentes combinaciones entre ruralidad y ciudad.

La falta de políticas públicas sobre viviendas y la existencia de asentamientos informales son una evidencia de la falta de planificación y de acompañamiento de los procesos migratorios que se acentúan con la desigual distribución de ingresos, la ausencia de áreas y espacios públicos, actividades

9 Realizado del 27 al 29 de marzo de 2018.

culturales y centros educativos y de salud que se necesitan en las ciudades. La existencia de planes reguladores formales alejados de las dinámicas reales del territorio y la necesidad de tener regulaciones con identidad local y participación ciudadana evidencia esta agenda inconclusa en las ciudades.

La ruralidad también está cambiando, se mezcla con el avance de la tecnología y supera la división urbano-rural que no valora la cultura, las exigencias del trabajo y las especificidades del mundo rural. Hoy el 80% de la población de América Latina vive en ciudades. Para el año 2050, estas albergarán a una población cercana al 90%. ¿Cómo actuarán los gobiernos para enfrentar este futuro inmediato?

Queda claro el derecho a vivir en paz y seguridad que tiene la población, independientemente de dónde viva. Considerar las interacciones y mutuas dependencias existentes con el mundo rural, identificar los puntos de encuentro, las contradicciones, las fronteras generalmente imprecisas, así como las diversas identidades e intereses, son un reto para el mundo urbano y las ciudades intermedias.

La seguridad ciudadana

El tema de la seguridad ciudadana está presente en el debate urbano y se realizan análisis de las causas y se identifican los avances y respuestas para enfrentarla.

No hay recetas mágicas ni soluciones únicas y una primera sugerencia que parece natural es proponer la identificación de los aspectos profundos que se presentan en cada sociedad y que son los que mueven las conductas humanas.

La violencia, cuando adquiere condiciones estructurales, debe enfrentarse en esa dimensión y la sociedad así debe reconocerla. La violencia, como la corrupción o el narcotráfico, es una conducta que tiene consecuencias sobre “los otros”, un sujeto pasivo con rostro difuso y un nombre genérico que, por supuesto, no somos nosotros. Este es el mecanismo psicológico para descargarnos de la responsabilidad de tener que involucrarnos en la superación de sus causas, comodidad que genera mayores costos cuando su existencia ya es un dato de la realidad.

Sin embargo, la identificación de esas causas son las que podrían ayudarnos colectivamente a no tener que sufrir las consecuencias de sus manifestaciones. La pregunta: ¿y qué pasaría si la víctima fuese yo? es un buen instrumento para interpelarnos con la siguiente pregunta: ¿y qué tendría que hacer yo frente a la violencia? El involucrarnos permitiría que nuestras conductas dejen de ser reactivas y superen la condición de

venganza social al pedir en discursos encendidos el aumento extremo de las sanciones o la reposición de la pena de muerte frente a una violación colectiva o un asesinato sanguinario.

La falta de compromiso real se demuestra cuando, luego de un tiempo, son las víctimas o sus familiares quienes deben peregrinar solitarias buscando justicia, pues la gente y los medios ya estamos ocupados con otros titulares.

Demasiados ejemplos tenemos para recrear esta situación de violencia cotidiana. La lista es dolorosamente generosa. ¿No son actos de violencia, individual o colectivamente asumidos desde la sociedad, la costura de labios, el escribir protestas con la sangre de los afectados, el tapiamiento, el entierro, la crucifixión, el bloqueo, las huelgas de hambre, las marchas, la flagelación, el vestir de pollera a los hombres? Y desde el ejercicio del poder, ¿acaso no es violencia la violencia legal desproporcionada, el lenguaje sexista, la banalización de las conductas, la mofa o el chiste sobre conductas repudiables?

A esto es lo que se llama identificar los aspectos profundos de las conductas humanas para enfrentar sus orígenes.

Cuando una sociedad enfrenta su propia violencia, las acciones adquieren mayor eficacia. Ellas van desde confrontar la violencia con información, actualizar estadísticas, desentrañar la evolución y manifestación de los delitos, capacitar a actores de cambio con campañas de promoción en favor de sociedades inclusivas y justas que demuestren que la seguridad es un compromiso colectivo, no un objeto de la política.

Y podrán ejecutarse acciones más sencillas e integrales como reconocer la importancia de la tecnología, las cámaras de vigilancia, la utilización de drones, la instalación de luminarias, la construcción de veredas, señalética, el respaldo a las redes sociales, el aprendizaje colectivo, la inversión en fortalecimiento comunitario para concluir en la promoción de la cultura, las artes y oficios, el turismo, la consolidación de espacios públicos, desarrollo de disciplinas deportivas, que deje en evidencia, inteligentemente, los focos de incivildad, físicos y mentales.

La evidencia demuestra la necesidad de “iniciativas de paz que vayan en pro del desarme, con más educación y menos armas” (FLACMA, Comisión Seguridad Ciudadana, 2018).

Las ciudades ya tienen nueva agenda

Existen tres tendencias en las que se encuentra la humanidad, que tienen características irreversibles y que plantean los retos que debemos

enfrentar. La vida en ciudades, el paquete tecnológico ligado a la conectividad, las redes, la inteligencia artificial y la modificación genética y, finalmente, el envejecimiento progresivo por el incremento de años de vida de las personas.

Vistas en perspectiva, resulta imprescindible abrir el debate sobre cada una de estas y las consecuencias que generan.

Nuestro trabajo sobre las ciudades busca socializar un fenómeno que está ligado a la migración, el abandono de las áreas rurales, la presión de servicios públicos y la calidad de vida de las zonas urbanas. Resulta complicado hacerlo en un país como el nuestro por la resistencia acrítica y voluntaria de no querer aceptar una realidad universal y específica. La aceptación de que somos un país con población urbana no tendría que entenderse como negación de lo rural o desconocimiento de nuestras raíces étnicas y culturales; quiere decir simplemente que el peso del gasto público y la inversión privada se realizará en donde se encuentra la gente, y eso no puede modificarse con discursos distractivos o decretos entusiastas.

Para ayudar a sincerarnos con la realidad, debemos modificar tres situaciones que pervierten la transparencia de la información poblacional y la aplicación de políticas públicas: dónde somos censados, dónde votamos y cómo está organizado nuestro sistema de representación electoral territorial.

Una población muy numerosa, el día del censo y como una forma de apoyar a su lugar de origen, regresa ese día al solar familiar para que la población no se vea disminuida, retornando al día siguiente a su lugar de trabajo habitual y, por tanto, a su domicilio.

La segunda es el conjunto de condiciones que genera el voto obligatorio de inscripción y consigna política, que produce el empadronamiento y traslado de votantes con fines electorales en algunos casos, demostrando dónde en realidad viven las personas, modificando, otra vez, la verdadera ubicación física de la persona en el territorio; planteamos la hipótesis de que las elecciones resultan ser una variable de ajuste censal, pues las personas votan donde trabajan y ahí están su familia y su patrimonio.

Y la tercera es consecuencia de la segunda, pues la conformación política del sistema parlamentario, al no corresponder a la realidad, no se conduce con las necesidades que se producen donde vive la gente. Y seguimos con un enfoque de las mayorías rurales y campesinas, confrontadas artificialmente con las ciudades, mientras estas no pueden resolver temas tan elementales como la basura, el transporte, los mercados o la seguridad ciudadana. Y no hablemos de generación de empleo, cobertura real de servicios, calidad de vida, ocio productivo, espacios públicos dignos, que se expresan en una agenda urbana básica en cualquier lugar del mundo.

Una situación generada por esta tercera tendencia está en el número de representación electoral y las disputas que se presentan regularmente por el crecimiento de población; a mayor población debiera producirse un incremento de representación parlamentaria, y viceversa, de manera natural y automática considerando, como en todos los países, un número mínimo de diputados que no tendría que modificarse así no le corresponda la población.

El tema del empadronamiento electoral, censo y domicilio, que debieran ser uno solo, en los países organizados se resuelve de manera muy sencilla en el municipio en donde viven y trabajan las personas. Se supone que es ahí donde desarrolla sus actividades, paga impuestos, recibe servicios y demanda derechos, todo en el mismo sitio.

Algún día estos temas tan simples se resolverán aplicando la tecnología adecuada que el mundo civilizado ha desarrollado en abundancia.

Línea de base

Filosofía 1: "Salvemos a Bolivia de la escuela"

Mariano Baptista Gumucio es el dueño de la frase. La publicó en 1972 y la acompañó de un apotegma: "Siempre consideré que la escuela es un *ghetto* donde se encierra a los niños por 12 años dentro de parámetros, horarios y programas cargados de monotonía absoluta".

A semejante reto, con plena vigencia, debemos aumentarle los que nacen de la globalización, el internet y la competitividad de las personas y de los Estados. No estamos digiriendo todavía lo que es la conectividad, la innovación, la globalización de la información, el conocimiento y la sabiduría, todo eso que ya viene junto.

Declaraciones poco felices del expresidente Morales, a las que nos tenía acostumbrado, arremetían sin sosiego de manera indistinta y por igual señalando que algunas universidades públicas son centros de perversión y las universidades privadas deben cerrarse. Si esto fuese cierto, tendríamos que reprogramar responsabilidades y recursos para no quedar, formalmente, sin ciencia, tecnología, investigación e innovación. Lo sospechoso ha sido el silencio de los interpelados.

Y se nos abalanza la pregunta lógica. ¿Cómo podemos ser un país abierto al mundo, creativo, tolerante, competitivo, innovador, productivo, conectado, si nuestro sistema educativo, en sus diferentes niveles, no lo es?

Escuché al presidente del Colegio Mayor San Lorenzo Ismael Serrate, en unas jornadas con pedagogos del grupo Mondragón, decir que en

las encuestas entre los niños sobre a quién admiran, nombran a sus padres, y que cuando crecen, señalan a futbolistas, artistas, cantantes... Entonces, además de los aspectos educativos básicos, aparece la familia con la misma pregunta: ¿estamos logrando desarrollar dentro de esta las categorías de apertura al mundo, creatividad, tolerancia, competitividad, innovación, productividad, conectividad...?

Tengo la sensación de que el sistema está preocupado por los discursos y por construir aulas, y que si todos no tomamos un papel más activo, los 12 años de estudio formal seguirán sin servir de mucho a la hora de desarrollar instrumentos de adaptación a los cambios que se producen en nuestro entorno y en el mundo. A lo dicho por Mariano, la información está en internet y los estudiantes aventajados van más adelante que el currículo, aburriéndose en clases memorísticas, irreflexivas y carentes de practicidad.

La participación popular propuso al ciudadano por encima del gremio, y se avanzó, pero no se llegó a superar un modo de organización que venía ancestral, como autoritario y centralista, consolidado en torno a la informalidad, el corporativismo y la sociedad del mutuo socorro. Ese modo es cómodo para la corrupción y el espíritu de algunos autócratas. Y la educación, sin darnos cuenta, lo está fomentando.

Filosofía 2: *Cuando el destino nos alcance*

El título corresponde a una película futurista filmada el año 1973 que se refiere a lo que ocurriría en Nueva York el año 2022. Aunque las previsiones no se han cumplido, los acontecimientos en torno al hecho no escapan a la realidad y nos permiten incorporarlos como parte de un análisis de escenarios.

Los acontecimientos de inicios de 2018 están demostrando un cansancio en la capacidad de reacción gubernamental. El gobierno ha sido tomado por sorpresa por las protestas de los jóvenes y las redes sociales, el conflicto por la salud escalado al Código Penal, el pacto fiscal y el reinicio del debate sobre el federalismo.

El método aplicado durante los años anteriores, consistente en esperar el agotamiento del adversario y continuar sin admitir errores, con el problema médico no funcionó. ¿Quién pensaba que se mantendría latente y agravado durante el periodo más sensible de nuestra vida social, entre Navidad y Año Nuevo? ¿Cómo es que se llegó a este extremo?

Para ponerlo en contexto, el problema de fondo será respondernos ¿hasta cuándo el poder dual, el corporativismo, el caudillismo, la informalidad, el autoritarismo, serán el modo de pensar y actuar de lo boliviano?

Cada una de estas categorías expresa una exquisitez nacional que establece nuestra diferencia con los modelos democráticos y la dificultad de reproducir nuestro modelo en América Latina por el costo económico e institucional que significa.

El ensayo que se llevó a cabo en Bolivia tuvo un gasto de 150 mil millones de dólares extras desde el año 2006, suma apreciable que permite exigir resultados más allá del discurso. Un dato técnico que espera explicación razonable: ¿cómo nos explicamos que en 2005 estábamos en el puesto 108 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en 2016 bajamos al 118 teniendo esos montos oficiales de ingresos nacionales?

El IDH, lo recordaba Jorge Hurtado Herbas en un debate en las redes, es una medida resumida del desarrollo humano. Es la media geométrica de índices normalizados que miden los logros en cada dimensión. Mide el avance promedio conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno. Estos datos interpelan a las dificultades que tuvo el pacto fiscal en su intento de aplicación.

Por otro lado, una intervención gubernamental en el ex Twitter presidencial de Morales, que descalificaba el federalismo de manera grosera atacando a Andrés Ibáñez, hizo recordar el debate no resuelto en la vida del poder y el territorio en Bolivia. Las autonomías entrabadas por el discurso que todo lo explica pero que no lo facilita, abre nuevamente un debate legítimo. El gobierno del MAS se enfrentó con sus contradicciones, y la manera cómo intentó resolverlas no resultó ser la más feliz al arremeter contra la base autonómica del Estado y tratar de descalificarla defendiendo al centralismo.

Filosofía 3: ¿En qué momento se jodió el Perú?

La pregunta lapidaria corresponde a Mario Vargas Llosa y con esta se inicia la novela *Conversación en la catedral*, publicada en 1969. La frase se ha repetido en diferentes circunstancias en Colombia, Argentina, y fue la misma que lanzó Carlos Mesa en un reconocido documental refiriéndose al MIR.

Los historiadores enseñan que las acciones en el tiempo tienen sus consecuencias y que corresponderá identificar el momento generador de una impronta para interpretar lo que sobrevendrá. Se dice que Hitler perdió la II Guerra Mundial en 1925, cuando publicó *Mi lucha*, veinte años antes de que ocurriera efectivamente. En ese momento, al entronizar la raza aria como superior, estaba limitando sus posibilidades de alianza, pues más allá

de las simpatías con el régimen y su posición ideológica compartida por muchos criollos del mundo, al no tener el sello ario estaban descalificados para estar entre los elegidos. Y con la existencia de una raza superior, sobrevenía la descalificación de los inferiores en el holocausto que todos conocemos.

Parece oportuno plantear la misma pregunta para el MAS: ¿en qué momento se jodió?

Lo haré sobre la base de la reflexión del propio Evo Morales cuando recordaba que tenía el respaldo del 61% del electorado boliviano expresado en las elecciones de 2015. Y tenía razón en la matemática que se patentizaba en el control lineal y obediente de todo el aparato del Estado. Disciplinado y consecuente, dirán los militantes del proceso de cambio. ¿Cómo es que teniendo ese volumen electoral un tiempo después pierde el crucial referéndum que necesitaba ganar para administrar el futuro? ¿Qué exceso de confianza lo llevó a cometer un error, puede decirse hoy, que modificó el grado de respaldo ciudadano y que lo hacía repetir que existía una conspiración para derrocarlo?

Dejaré de lado los temas de corrupción, producto de una práctica corporativa que admite esas conductas como un derecho de los anteriores, los actuales y los futuros en una sociedad de mutuo socorro, y que solo parecen diferir en los volúmenes administrados, manteniéndose la práctica. La corrupción no pareció ser la razón de la disminución del respaldo ciudadano.

No pareció ser la utilización extrema de un lenguaje beligerante que hacía culto de la guerra y la confrontación como instrumento para parir violentamente la historia, como casi nos acostumbraron a escuchar. Ni siquiera las promesas discursivas de rupturas radicales de la economía liberal, que, por otro lado, ha logrado un saludable, complicado y precario equilibrio.

Tampoco lo fue la ruptura social cultural que ha planteado lo aymara como eje de soporte estatal con una emblemática plurinacionalidad lingüística que ni el presidente, vicepresidente, ministros y presidentes de las cámaras legislativas demostraron cumplir.

Repasé todos los espacios comunes y finalmente llegué a uno que al parecer reúne las condiciones de los otros que se jodieron; parece que el talón de Aquiles de la credibilidad construida en torno al indio, como le gustaba repetir al presidente Chávez, ha sido el no respetar las reglas del juego democrático y aferrarse al poder usando un poder total, análisis que compartimos con Gustavo Pedraza.

El No del 21F y sus consecuencias, al parecer, fue la razón misteriosa del descontrol que generó la pérdida de un modelo revolucionario democrático y cultural que controlaba todo sin resolver los problemas.

Filosofía 4: "El que se mueve, no sale en la foto"

La frase pertenece a Fidel Velázquez, el mítico dirigente sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). Y parece apropiado recordarla.

La crisis en el ejercicio y agotamiento del poder generó una inflexión discursiva y de actitudes en la defensa de la democracia. No se esperaba que fuera desde Santa Cruz, ni desde los sectores que ya habían encabezado movilizaciones en varias oportunidades, el remozamiento de una agenda nacional con posiciones que superaron el espacio de lo local, calificado de conservador, para adquirir la calidad de vanguardia nacional, causando sorpresas.

La crisis fue demostrando la irrupción de unas variables cada vez más nítidas: la vida en ciudades, la presencia de jóvenes y mujeres, las clases medias y las redes. Y contra ellas arremetía sin misericordia García Linera con un discurso desvelado, dejándolo como el campeón de la violencia verbal y la confrontación. La joyita de que las clases medias estaban en decadencia fue una burla a sus propias elucubraciones de que el proceso había sacado a varios millones de bolivianos de la pobreza. Describió el fenómeno, pero no lo entendió.

La respuesta a la crisis que se desbordó desde el martes 28 de noviembre de 2017 fue ofreciendo la posibilidad de construir una línea ordenadora sobre la base de tres situaciones hasta ese momento:

1) Crítica radical al fallo del Tribunal Constitucional que pretendía habilitar la reelección indefinida del expresidente Morales; 2) la defensa nacional de la soberanía popular expresada en el Referéndum del 21F, y 3) la demanda de abrogación del Código del Sistema Penal.

Siguieron los despropósitos con características de chantaje que expresaban que si Morales no continuaba después de 2020, habría inestabilidad social y política.

La crisis dejaba en evidencia un modo de organización diferente y que podría expresarse en un modo federal: son los territorios, los departamentos, con sus liderazgos, quienes están construyendo una agenda nacional. Los tiempos, las palabras, las acciones eran diversas y creativas. Todas sumaban y enriquecían. Fue más difícil de organizar, pero la experiencia demostró que era más inclusiva, más sólida y más respetuosa con la libertad. Estoy recordando a Andrés Ibáñez, el jueves 11 de enero de 2018, con la creativa convocatoria de las promociones de los colegios que sumó una multitud, además de un paro cívico con la suma de transportistas y otros sectores. Eran situaciones nada agradables, pero señalaban un cansancio social frente a una actitud de atropello que el régimen no percibía.

La crisis dejó en evidencia que casi todo podía ser distinto si se respetaba la voluntad ciudadana del 21F. Si se quitaba esa variable distorsionadora del debate, el conflicto habría sido manejable con otros instrumentos de negociación. La crisis y el estilo del expresidente Morales terminaron por agotar a los negociadores, con fotos de rostros patéticos.

La ruta crítica planteaba las elecciones de octubre de 2019 y la posesión del nuevo presidente en enero de 2020. Y nadie se movía de ella. Nadie.

Filosofía 5: Hambre cero, migración rural y crecimiento de ciudades

En el mundo existen 800 millones de personas que padecen hambre, y el número no disminuye. El dato no puede pasar desapercibido ni es posible asumirlo como un simple titular de prensa.

La preocupación mereció dos días de debate en la III Cumbre Mundial Hambre Cero.¹⁰ La Cumbre reunió a 2.500 personas de 35 países de tres continentes, quienes trabajamos sobre alguna de sus manifestaciones. La presencia de ocho expresidentes que asumieron liderazgo en la ejecución de respuestas sirvió de marco de referencia a los paneles y mesas de trabajo.

Las experiencias existentes en el mundo de cómo vencer el hambre permiten afirmar que estamos frente a un problema no relacionado con la capacidad de producción de alimentos ni con las posibilidades reales que tiene la humanidad para hacerlo, sino con una incapacidad de gestión de los gobiernos, de oportunidades que no son aprovechadas y de decisiones de políticas públicas que no responden a necesidades concretas, como señaló César Gaviria, ex secretario general de la OEA.

Se repasaron un conjunto de categorías sobre las que existe consenso teórico, pero que no se ven acompañadas de acciones consecuentes. Las más repetidas fueron la necesidad de invertir en el desarrollo de conocimiento y educación, empoderar y dar oportunidad a la mujer para que administre en lo grande lo que hace en lo cotidiano; realizar inversión pública y alentar la privada para fortalecer las capacidades agrícolas desde las comunidades hasta las empresas productoras de alimento. La necesidad de fortalecer la participación ciudadana, reconciliarnos con el ambiente y las consecuencias del cambio climático, que ya tienen carácter irreversible en algunos lugares del planeta.

La necesidad de reforzar los marcos institucionales que apoyan la producción de alimentos, y que se expresan en gobernabilidad, democracia

10 Realizado en Cuenca, Ecuador, el 27 y 28 de abril de 2018.

y descentralización, la necesaria coordinación entre los niveles territoriales, los organismos del Estado y los organismos internacionales, el respeto a los modos culturales de las comunidades y, paradójicamente y de manera simultánea, la utilización de la biotecnología, remataron en temas tan simples como aprender a comer de manera equilibrada.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el que el objetivo 2 es precisamente el de Hambre Cero, fueron recordados permanentemente como parte de un compromiso ineludible y una articulación imprescindible. No hay posibilidad de resolver este problema que lacera si no existe un compromiso concertado de la Humanidad. Se repitió el riesgo que tienen las sociedades satisfechas que alientan el consumismo y en las que se ha convertido en una enfermedad la obesidad y sus secuelas, y el aumento de alimentos convertidos en basura.

Los aportes generados en los territorios fueron relevados de manera especial en varias mesas bajo el título de “Experiencias exitosas”; se compartieron conocimientos que alcanzan carácter práctico y pueden ser compartidos. Bolivia aportó a la Cumbre los hallazgos que estamos encontrando en el abandono del campo, la migración y las ciudades intermedias, del CEPAD, los resultados logrados por el Gobierno Municipal de San José de Chiquitos en desarrollo integral y el avance productivo de las gobernaciones de Santa Cruz y Potosí en sus respectivos departamentos.

La Cumbre concluyó con 21 propuestas que serán presentadas al Sistema de Naciones Unidas. El objetivo es que sean incorporadas como parte de la agenda mundial de seguridad y soberanía alimentaria y que se implementen a través de políticas, acciones, programas y proyectos concretos en beneficio del desarrollo territorial. Entre los planteamientos está crear una plataforma internacional de cooperación horizontal y descentralizada para articular iniciativas.

Filosofía 6: Bolivia ha cambiado

Es tan elemental la afirmación que ya no genera sorpresa su aceptación. Si a ella le sumamos la pregunta ¿cuál es la medida del cambio?, es probable que empiecen las dificultades.

Los elementos simbólicos de la República han intentado ser modificados, desde el nombre del Estado, cuya nomenclatura es el resultado de un decreto supremo, pues la nueva Constitución no tiene un mandato expreso con relación al tema; similar situación se ha producido con el 22 de enero, que mediante otro decreto se declara como la fecha de creación del Estado Plurinacional, acompañado del feriado nacional con entusiasta suspensión de actividades públicas y privadas.

Otro decreto aprobó, acompañado de su feriado consecuente, el 21 de junio como el Año Nuevo aymara. Bolivia es así, entonces, un Estado que cuenta con dos nombres (Estado y República), dos fechas históricas constitutivas, dos sedes de órganos de la República, dos sistemas de administración de justicia, dos fechas recordatorias de la festividad del Año Nuevo, dos banderas, en un conjunto de cambios más bien festivos que reales, como el uso de dos lenguas oficiales para los servidores públicos que ni el presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados han acreditado. Para no ir más lejos.

El sinceramiento con la realidad social y cultural es otra señal del cambio. En el inicio del proceso, las acciones contra los *k'aras* significaron un asusto, como dirían en Vallegrande, por el impacto que significaban las señales contra la oligarquía, la corbata, entre otras. Reaparecieron vestimentas, conductas y rituales que han ido adquiriendo carta de ciudadanía con una combinación de autenticidad, sincretismo y construcción simbólica cuyas fronteras resulta difícil definir. Es el caso de la nomenclatura “originario indígena campesino”, sin comas que separen las características de cada grupo social, etnia o nación.

Este abigarramiento, al decir de Zavaleta, es una de las señales de los nuevos tiempos. Se produjo una suerte de vergüenza encubierta por parte de la sociedad nacional, la mestiza, blancoide, carayana, identificada con la oligarquía y el antiguo régimen que, como en la Francia de la Revolución, fue sometida a la guillotina de la marginación y la burla. Un manto de silencio cubrió muchas de las prácticas que servían de ostentación de la otrora burguesía latifundista, depredatoria, vendepatria, racista, para dar paso a otras formas necesarias de relacionamiento y movilidad social.

Analizado desde la dialéctica implacable de la Historia, estamos hoy frente a tres características que son una rémora de la historia antigua y que el proceso de cambio no logró hacer desaparecer y, por el contrario, se han impuesto con su reaparición incómoda y augural: los jóvenes y mujeres, las ciudades y las redes. Y una consecuencia más incómoda todavía, las clases medias.

Los nuevos actores de la sociedad demandan ya no inclusión y democracia, pues esos son bienes públicos incorporados a la cotidianidad sin posibilidad de ser desconocidos; los nuevos actores, los jóvenes, piden oportunidades laborales dignas. Y la migración, como dato de la realidad, convierte nuestra vida en urbana en un Estado que se declara “originario indígena campesino” sin tener la administración de su territorio rural por la imposibilidad material de satisfacer servicios públicos. Y con una República de gente que se informa, protesta y ejerce ciudadanía desde la conectividad y que deja al poder en una situación de burla y descontrol.

Este es un momento de gozo por el cambio. Los fachos y golpistas no deben volver, ni queremos a los racistas de chicote o los violentos de la verborragia. Estamos construyendo sobre realidades simples una sociedad humana.

BIBLIOGRAFÍA

- Bolivia Emprende (2014). “Turismo generó más de mil millones de dólares y 294.000 empleos en 2013”. *Bolivia Emprende*. Web. Consultado 15 de enero de 2021.
- Cinconoticias (s.f.). “Ecología urbana, el camino hacia las ciudades sostenibles”. *Cinconoticias*. Web. Consultado 15 de enero de 2021.
- Conese, Ignacio (2019). “Santa Cruz de la Sierra, la nueva ciudad estrella de América Latina”. *La Nación*, Buenos Aires, 8 de enero. Web. Consultado 15 de enero de 2021.
- Curi, Cesín (2020). “Proyecto de desarrollo agroindustrial de la quinua Real orgánica en tierras áridas, salinas, no tradicionales del Altiplano boliviano”. Exposición auspiciada por el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Web. Consultado 15 de enero de 2021.
- Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) (2018). Declaración del XIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones realizado del 27 al 29 de marzo.
- Köhler Perrogón, Rolf (2018). “El desarrollo agropecuario y forestal en Bolivia”. Relatoría *V Encuentro Internacional de Ciudades Intermedias*. “*Ciudades intermedias, una respuesta a los procesos migratorios*”. Santa Cruz de la Sierra: Centro de Formación de la Cooperación Española.
- La Razón* (2016). “El turismo genera \$us 693 millones en 2015”. La Paz, 29 de septiembre.
- La Voz* (2018). “Con cámaras y radares, la ciudad de Córdoba controlará el tráfico a partir de noviembre”. *La Voz*, 22 de octubre. Web. Consultado 15 de enero de 2021.
- Molina, Carlos Hugo (2019). *La nación de los indios chiquitos*. Santa Cruz de la Sierra: El País.
- Página Siete* (2018). “Evo: indígenas estarán en el poder ‘toda la vida’”. La Paz, 13 de mayo.
- (2017). “Bolivia gana el ‘Oscar’ del Turismo como Mejor Destino Cultural de América del Sur”. La Paz, 10 de septiembre.
- Romero, Carlos V. (1878). *Disertación sobre el principio federativo leída el 6 de agosto de 1878 en el salón del Cuerpo Legislativo*. Sucre: Imp. de P. España.
- Viceministerio de Autonomías (2017). “Toca el turno de implementar el pacto fiscal”. *Opinión. El Deber*, 22 de diciembre.

BRITAIN

ISBN: 978-9917-30-013-7



9 789917 300137